

COLECCIÓN
MENSAJES

Voces ciudadanas 25 años

Una metodología de participación
al servicio de la ciudadanía

Beatriz Elena Marín-Ochoa y
Juan Guillermo Bedoya-Jiménez
Compiladores

307.76
M339

Marín-Ochoa, Beatriz Elena, compiladora

Voces ciudadanas 25 años. Una metodología de participación al servicio de la ciudadanía / compiladores Beatriz Elena Marín-Ochoa y Juan Guillermo Bedoya Jiménez -. Medellín: UPB, 2024.
235 páginas (Colección Mensajes).
ISBN: 978-628-500-135-2

1. Periodismo – Aspectos sociales 2. Periodismo cívico 3. Periodismo urbano

CO-MdUPB / spa / rda
SCDD 21 / Cutter-Sanborn

- © Beatriz Elena Marín-Ochoa
- © Juan Carlos Ceballos Sepúlveda
- © Joaquín Alonso Gómez Meneses
- © Juan Esteban Mejía Upegui
- © Juan Guillermo Bedoya-Jiménez
- © Óscar Eduardo Sánchez García
- © Editorial Universidad Pontificia Bolivariana
Vigilada Mineducación

Colección Mensajes

Voces ciudadanas 25 años. Una metodología de participación al servicio de la ciudadanía

ISBN: 978-628-500-135-2 (versión digital)

DOI: <http://doi.org/10.18566/978-628-500-135-2>

Primera edición, 2024

Escuela de Ciencias Sociales

Facultad de Comunicación Social-Periodismo

Grupo de Investigación Comunicación Urbana -GICU-. Proyecto: Estado del arte de la investigación en perspectiva de los estudios en comunicación y ciudad realizadas por investigadores colombianos sobre ciudades. Radicado: 082C-05/18-17

Gran Canciller UPB y Arzobispo de Medellín: Mons. Ricardo Tobón Restrepo

Rector General: Padre Diego Marulanda Díaz

Vicerrector Académico: Álvaro Gómez Fernández

Decano de la Escuela de Ciencias Sociales: Omar Muñoz Sánchez

Director de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo: Juan David Suárez Vera

Coordinadora (e) editorial: Maricela Gómez Vargas

Producción: Ana Milena Gómez Correa

Diagramación: Editorial UPB

Ilustración portada: Memo Ángel, Fotografía: Centro de producción audiovisual, CPA, UPB

Corrección de estilo: Cristian Suárez

Dirección Editorial:

Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2024

Correo electrónico: editorial@upb.edu.co

www.upb.edu.co

Medellín, Colombia

Radicado: 2307-03-04-24

Prohibida la reproducción total o parcial, en cualquier medio o para cualquier propósito sin la autorización escrita de la Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.

escuchando

Un cuarto de siglo escuchando. Retrospectiva de *Voces ciudadanas*

Joaquín Alonso Gómez Meneses¹
y Juan Esteban Mejía Upegui²

1 Docente de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Comunicador Social - Periodista de la UPB, y magíster en Comunicación Transmedia de EAFIT. Ha publicado artículos, libros y participado en investigaciones asociadas al programa *Voces ciudadanas*. Cuenta con experiencia como comunicador, periodista, editor y director del periódico universitario *Contexto*. Correo electrónico: joaquin.gomez@upb.edu.co

2 Docente de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Comunicador Social - Periodista de la UPB, y magíster en Derecho de la UdeA. Ha publicado artículos, libros y participado en investigaciones asociadas al programa *Voces ciudadanas*. Cuenta con experiencia como comunicador y periodista. Correo electrónico: juan.mejia@upb.edu.co

Ilustración 6. Retrospectiva de voces



Fuente: Elaboración propia.

Este capítulo presenta una retrospectiva de los ejercicios de *Voces ciudadanas* realizados a lo largo de 25 años, desde 1998 hasta 2021. Es como un viaje en el tiempo, al pasado, que nos presenta un contexto de país, para una mejor comprensión de las diferentes problemáticas planteadas en cada ejercicio y sobre cómo se aportó desde el diálogo entre los ciudadanos y la academia a la construcción de una solución.

1998

En los años noventa, Colombia intentaba renacer en medio del caos. Recién empezada la década, en 1991, la Asamblea Nacional Constituyente concertó una nueva Carta Política, un pacto nacional que prometía respetar libertades y promover

la participación de los ciudadanos en asuntos públicos. Su implementación no fue inmediata, pues el camino estaba colmado de obstáculos. El más notorio era el narcotráfico, que no desapareció con la muerte de Pablo Escobar en 1993, sino que, por el contrario, brotó en diversos sectores de la sociedad. Sus metástasis en la política afligieron a un país que apenas lograba aguantar el hastío de la violencia, la pobreza y la corrupción.

Ernesto Samper Pizano fue el primer presidente que gobernó por un periodo completo de cuatro años con la ruta trazada por la nueva Constitución. Su gestión quedó empañada por lo que se conoció como el Proceso 8000, un escándalo en el que lo acusaron por el ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña. El caso alcanzó tal resonancia internacional, que el Gobierno de los Estados Unidos canceló la visa del mandatario colombiano (Bedoya, 2019).

Además del flujo del narcotráfico por diversas esferas de la sociedad, la guerra seguía cobrando víctimas. Los grupos armados ilegales ganaban cada vez mayor fortaleza y control de territorios a los que no llegaban las instituciones del Estado. En 1998 terminaba el Gobierno de Samper. Al comenzar el año, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la guerrilla que más atemorizaba al país en aquel entonces, informó que arrearía agresiones contra el Ejército y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos grupos paramilitares anunciaron que responderían igualmente con violencia a los ataques de sus enemigos. El cuestionado presidente de Colombia intentó convocar una mesa de diálogos, sin lograr mayor éxito. La deslegitimación y la falta de soluciones efectivas por parte de las entidades públicas más el acoso de los grupos violentos impedían entender lo que estaba pasando. Para las elecciones de ese mismo año, el candidato Andrés Pastrana Arango despertó esperanza con su disposición para dialogar con las Farc. Esa fue la bandera de su campaña y con

ella ganó. El respaldo popular dio un mensaje claro (Bedoya, 2019). El país tenía que conversar.

Voces ciudadanas por la Seguridad y la Convivencia (Medellín)

Aquel 1998 también fue un año de relevos en los gobiernos de Medellín y Antioquia. El primero de enero, el exgobernador Álvaro Uribe Vélez le entregó el cargo a su sucesor, Alberto Builes Ortega. Ese mismo día, el exalcalde Sergio Naranjo Pérez dejó el puesto que pasó a ocupar Juan Gómez Martínez. Los nuevos mandatarios llegaron con el cometido de buscar la paz que reclamaban sus electores para una región contaminada por la inequidad, la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, el desorden y la improvisación en la administración pública (Bedoya, 2019).

Medellín no era una sola ciudad, sino un espacio que acogía múltiples voces e intereses que no dialogaban. Estaban, por un lado, empresarios que pedían garantías para el mercado. Por otro, había líderes sociales, académicos, periodistas, intelectuales y activistas de los derechos humanos perseguidos por exigir cambios y acciones efectivas del Estado para ofrecer soluciones y dirimir conflictos. Además, había una comunidad que reclamaba equidad, convivencia, protección y bienestar (Bedoya, 2019).

La inseguridad tenía características de delincuencia común, como robos y asesinatos, pero también obedecía a lógicas propias del conflicto, con ejércitos paramilitares, milicias guerrilleras y cooperativas de autodefensa en los barrios. Cualquier persona podía ser víctima, y, si no recibía algún ataque, limitaba su libertad. Era común en aquel entonces que la gente evitara transitar por sectores que se consideraban peligrosos y a horas que suponían un mayor riesgo. El Instituto Popular de Capacitación (IPC) registró en un informe que solo

en 1996 se presentaron en Medellín 3854 homicidios. De cada cien personas asesinadas, 93 eran hombres, 40 eran jóvenes entre 18 y 25 años y 72 murieron tras recibir el disparo de un arma de fuego. La Candelaria y Aranjuez eran las comunas con mayor cantidad de víctimas.

Los retos de los gobiernos regional y local no eran menores, y requerían apoyo de la prensa y de la sociedad en general. De nuevo, igual que pasaba en el resto del país, la consigna era invitar a conversar (Bedoya, 2019).

Aquel objetivo requería cambios. Los medios de comunicación mantenían el esquema de emisores que se dirigían a unos receptores pasivos sin oportunidad de responder a los mensajes. Bajo este esquema, los diarios, la radio y la televisión se quedaban cortos para promover un diálogo entre ciudadanos y autoridades. En este contexto, la Facultad de Comunicación Social - Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) impulsó el proyecto *Voces ciudadanas*, con una metodología que permitió escuchar opiniones de públicos distintos a las fuentes de información oficiales. Entre los objetivos de esa iniciativa estaba el de captar la atención de las audiencias y mantenerla como fuente de insumos informativos para hacer visible la agenda ciudadana y conectar otros sectores a dichos debates (Miralles Castellanos, 2000).

Para atender las preocupaciones que tenían los habitantes Medellín en aquel 1998, el primer proyecto fue "Voces ciudadanas por la Seguridad y la Convivencia". Estuvo a cargo de la Especialización en Periodismo Urbano de la UPB y de su coordinadora, la profesora Ana María Miralles Castellanos. El objetivo general fue "promover el diálogo colectivo y la deliberación para adelantar un proceso que involucre a la ciudadanía en la búsqueda de soluciones al problema de inseguridad ciudadana en Medellín" (Miralles Castellanos, 2000, p. 9). La idea era que los medios de comunicación publicaran preguntas para que la gente las respondiera a través de líneas telefónicas, cartas,

faxes y correos electrónicos, e invitaran a la ciudadanía a participar de manera activa en foros. Todas las opiniones servirían para establecer una visión general sobre la inseguridad y, desde allí, definir soluciones entre todos los participantes.

Ese plan despertó el entusiasmo de los medios de comunicación de El Colombiano, EL Mundo, RCN, Informativo de Antioquia y Telehora Noticias. También se sumaron las universidades de Medellín, Los Andes y la Adventista. Fueron dos meses de trabajo intenso. Para facilitar el análisis de la información, los aliados dividieron la ciudad en seis zonas. Académicos de la Universidad de Medellín salieron a las calles y entrevistaron a 508 habitantes mayores de 15 años. Profesores y estudiantes de la Universidad Adventista realizaron otra consulta con 227 jóvenes. En los dos casos se aplicaron cuestionarios con preguntas abiertas que buscaban conocer las percepciones respecto a la inseguridad en Medellín y definir las diversas corrientes de opinión sobre ese tema. Los consultados consideraron que la ciudad era segura en términos medios y que entre los factores que perturbaban el orden estaban la delincuencia común, el desempleo, las drogas y la falta de vigilancia. Según la primera encuesta, los responsables de la inseguridad eran los ciudadanos mismos y, de acuerdo con el segundo sondeo, el Gobierno también era causante de dicho problema. La solución, de acuerdo con las respuestas obtenidas en el estudio, estaría en el empleo, la educación y el incremento de la fuerza pública.

Con los datos obtenidos en aquellos estudios, los medios de comunicación definieron un plan de cubrimiento informativo. El 9 de febrero de 1998, día del Periodista, empezaron a publicar informes sobre la inseguridad en los que hablaba gente común y ya no solo autoridades o expertos. De igual forma, prensa, radio y televisión hicieron pedagogía para explicar el concepto y el método de *Voces ciudadanas*. Así, abrieron el diálogo con la comunidad y la invitaron a participar para responder cinco preguntas: ¿Qué ideas tiene para combatir el delito en Mede-

llín? ¿Cuáles son sus propuestas para disminuir el delito en Medellín? ¿Cómo disminuir el delito en su zona? ¿Qué iniciativas conoce para combatir la inseguridad en Medellín? ¿Cómo lograr la convivencia? Cada semana, los medios publicaban un interrogante y compartían resultados del anterior.

En total, llamaron por teléfono 717 personas y otras 26 escribieron cartas para dar sus respuestas. Las universidades que hacían parte del proyecto coordinaron seis foros a los que asistieron 140 ciudadanos, líderes de organizaciones sociales y autoridades municipales. Los diálogos abordaron tres temas esenciales. El primero fue sobre la manera de recuperar la convivencia. El segundo, respecto a la efectividad de la justicia y de las autoridades. Y el tercero se enfocó en las formas de promover el desarrollo social equitativo. Los participantes coincidieron en la necesidad de mejorar la educación cívica, fortalecer el trabajo comunitario y desarrollar proyectos que generaran empleo. También propusieron capacitar policías, ampliar el pie de fuerza, promover el desarme de la población, reformar el sistema judicial y evitar la corrupción. Esa agenda ciudadana coincidió con el Plan de Desarrollo del alcalde y su Plan Estratégico. Aquel ejercicio valió la pena, pues demostró que ciudadanos y autoridades compartían la misma visión de la ciudad, permitió que la prensa convocara al diálogo y promovió la participación que ofrecía la nueva Constitución.

1999

Vive el centro (Medellín)

En 1999, el proyecto de *Voces ciudadanas* se fortaleció y facilitó el diálogo respecto a diversos temas. El 3 de marzo empezó una nueva conversación con el objetivo de promover la participación sobre la transformación necesaria y deseada para el centro de

Medellín. Por esta zona transitaba la mayoría de los ciudadanos, pero tenía pocos dolientes. El sentido de pertenencia era mínimo. A este capítulo se sumaron los medios El Colombiano, El Mundo, Telemedellín, RCN, Todelar y Habitantes de la Noche, y la Universidad de Medellín. La coordinación estuvo a cargo de la Especialización en Periodismo Urbano, de la UPB.

En un primer momento, la Universidad de Medellín entrevistó a 686 habitantes de la ciudad mayores de 15 años. Gran parte de quienes respondieron las preguntas coincidió en que los principales problemas del centro eran la inseguridad, la congestión vehicular y la desordenada presencia de vendedores ambulantes, que obstaculizaban el tránsito peatonal. Los adjetivos con que los entrevistados calificaron aquella zona fueron miedo, nervios, pereza y estrés, aunque algunos también expresaron sentimientos optimistas, como amor y tranquilidad.

Un grupo de ciudadanos participó en un panel para definir los temas que abordarían los medios de comunicación sobre el centro de Medellín. La conclusión fue que el plan de informes periodísticos debía hablar de manera específica sobre la Avenida Oriental, por ser la que más representa el sector, el comercio, y, desde ahí, abordar los principales problemas que arrojó la encuesta.

Los medios aliados prepararon historias según lo acordado e invitaron a los ciudadanos a compartir sus opiniones con base en cinco preguntas: ¿Qué siente usted por el centro de Medellín? ¿De qué color es el centro de Medellín? ¿Cuál es el lugar más inseguro del centro de Medellín? ¿Qué haría usted por el centro? ¿Qué necesita el centro? En total, 582 personas se comunicaron por teléfono para ofrecer sus respuestas. Después de recibir los comentarios, los coordinadores del proyecto programaron once grupos focales en los que se sentaron a conversar 200 habitantes de la ciudad sobre las posibles soluciones a la situación del centro. La agenda ciudadana quedó conformada por siete puntos que se le entregaron al alcalde

de Medellín, Juan Gómez Martínez, el 23 de agosto de 1999. El mandatario recibió un documento en el que los ciudadanos proponían mejorar la oferta cultural del centro, divulgar su importancia histórica y social, y volverlo más residencial. También dieron ideas para descongestionar las vías, como integrar rutas de buses al metro y habilitar parqueaderos, y destinar espacios para ubicar a los vendedores ambulantes de forma organizada. Finalmente, sugirieron ampliar la presencia de la policía hasta tarde en la noche y ofrecerles a los indigentes servicios de aseo, alojamiento y alimentación para hacerle frente a la inseguridad.

Voces ciudadanas por la reconstrucción (Eje Cafetero)

Mientras Medellín intentaba recuperarse de la violencia del narcotráfico, otra región del país, el Eje Cafetero, se derrumbó. El 25 de enero de 1999, un terremoto de magnitud 6,1 en la escala de Richter sacudió con fuerza a 28 municipios. El que sufrió mayores consecuencias fue Armenia, en Quindío, que fue el epicentro. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el sismo dejó 1185 personas muertas, 8536 heridas y 35 972 viviendas destruidas o imposibles de habitar. Todos los daños sumaron 2,7 billones de pesos. El Gobierno nacional creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC), encargado de coordinar y administrar todo lo necesario para volver a levantar lo que quedó destruido (Servicio Geológico Colombiano [SGC], s. f.).

Además de las pérdidas físicas, las consecuencias sociales también fueron demoledoras. Las posibilidades de dialogar eran pocas en un territorio que no lograba encontrar la mejor manera de resurgir en medio de tanto caos e incertidumbre. Por eso, se unieron la Gobernación y la Universidad del Quindío, la Embajada de Estados Unidos, la organización Viva la Ciudadanía, la Universidad Pontificia Bolivariana y medios de

comunicación locales y nacionales. El objetivo de esta alianza fue desarrollar el proyecto "Voces ciudadanas por la Reconstrucción" para facilitar un espacio de conversación público y abierto que hiciera más democrática la restauración que se venía adelantando. La formulación de este proyecto dejó claro su fin y alcance (Miralles Castellanos, 1999):

Las tendencias de opinión pública del ciudadano raso al que verdaderamente apunta esta propuesta nos permitirán, por la vía del escenario mediático, hacerlo participar en el proceso de reconstrucción y dar visibilidad a sus voces ante quienes tienen la responsabilidad directa de la reconstrucción en todos sus aspectos, con lo cual aspiramos a que no queden dudas sobre el hecho de que la ciudadanía se expresó en sus expectativas frente al proceso. Si bien no podemos comprometernos a hacer realidad esas expectativas, por lo menos se les dará legitimidad pública en los medios, de tal manera que estén en posición de permear la o las posiciones a las que les haga falta contar con el punto de vista de la ciudadanía. (p. 2)

Con esta declaración de intenciones, empezó la ejecución del proyecto en junio. Los organizadores habilitaron una línea, y entre septiembre y noviembre recibieron 90 llamadas de personas mayores de 15 años que decidieron compartir opiniones y 286 ciudadanos respondieron encuestas. Tres preguntas guiaron este primer acercamiento con la comunidad: ¿Cómo evalúa usted el proceso de reconstrucción? ¿Cuáles deben ser las prioridades en la reconstrucción de Armenia? ¿Cómo debe ser reconstruido el centro de Armenia?

En general, quienes respondieron estas preguntas mostraron temor de que Armenia no fuera reconstruida y cuestionaron la falta de transparencia en la administración de los recursos públicos por parte de las organizaciones encargadas de hacerlo. Definieron que las prioridades debían ser la generación de

empleo; la construcción de viviendas, instituciones educativas y centros de salud; la atención psicológica de los damnificados; y la reactivación del comercio. Además, la mayoría de las personas consideró que el centro de la ciudad debía convertirse en una zona comercial para reactivar el empleo, con vías amplias, parques y áreas verdes.

Después de aquellas encuestas y de recibir llamadas telefónicas, los organizadores del proyecto hicieron un sondeo sobre diferentes aspectos. El primero fue la "ciudad desastre". La mayoría de los ciudadanos dijo que en el momento del terremoto sintió miedo, temor, pánico, susto, desespero, pesimismo e impotencia. La inquietud principal era saber cómo estaba la familia, seguido por la incertidumbre de las pérdidas físicas y de los medios para sobrevivir. Gran parte de quienes compartieron su opinión dijo que la tragedia fue tan grave por culpa de las fallas geológicas en la región y la mala construcción de los edificios. Según las respuestas, la vida de los ciudadanos de Armenia cambió porque perdieron la vivienda, el empleo y se volvieron más nerviosos. Esto les ayudó a valorar más la familia, los amigos y la vida, los llevó a ser más creyentes y a tener más conciencia por la ciudad. En consecuencia, cambiaron las relaciones, pues la tragedia hizo que la gente fuera más unida, solidaria y amable. Al tiempo, casi la mitad de las personas dijo que las instituciones oficiales como el Concejo, la Asamblea, la Gobernación y la Alcaldía no cumplían sus funciones para atender el desastre. Respecto a la manera como los medios de comunicación presentaron la tragedia, no hubo consenso. Una parte de los consultados dijo que la información ayudó a la gente y la otra consideró que la prensa fue amarillista.

El segundo aspecto del sondeo fue la "ciudad memoria". Aquí, los ciudadanos consultados dijeron que las principales pérdidas fueron las vidas humanas, las viviendas, y la estabilidad emocional y económica. También lamentaron la desaparición de espacios públicos como centros de salud, ins-

tituciones educativas, parques y zonas de comercio, que son lo que más recordaban y extrañaban, según expresaron en sus respuestas. Del mismo modo, expresaron que en su memoria aún conservaban la forma de vida, la familia, las posibilidades económicas, la belleza, la tranquilidad, la organización y la alegría de Armenia antes del terremoto. Además, consideraron que el resto del país mira la ciudad con lástima porque quedó destruida, pero al mismo tiempo como un territorio capaz de progresar, generar empleo, desarrollar el turismo y vivir bien. Quienes participaron en el sondeo soñaron con que la reconstrucción les dejaría más vías, infraestructura moderna con parques, zonas verdes, construcciones sismorresistentes, centros comerciales, instituciones educativas y sitios para la recreación, cultura y diversión.

El tercer asunto que abordó el sondeo fue la “ciudad reconstruida”. En este caso, la mayoría dijo que la restauración avanzaba con lentitud y que las organizaciones encargadas de administrarla no tenían en cuenta la opinión de los damnificados para definir prioridades. *Voces ciudadanas* les dio la oportunidad de expresar sus puntos y pudo establecer que, para ellos, lo más urgente era levantar de nuevo las viviendas, las instituciones educativas y los establecimientos de comercio para reactivar el empleo.

Luego de hacer encuestas, sondeos y de recibir llamadas telefónicas, los organizadores de *Voces ciudadanas* realizaron siete grupos de discusión con quienes mostraron la intención de profundizar en sus opiniones. En estos encuentros, los participantes insistieron en que la reconstrucción era lenta. Expresaron dudas respecto al manejo de los recursos y mostraron molestia porque sentían que los encargados de administrarlos no tenían en cuenta a los damnificados para tomar decisiones y no les ofrecían información veraz. Algunos, incluso, mencionaron interferencia de políticos que tal vez buscaban sacar provecho, y consideraron que el alcalde no apoyaba a la gente.

Advirtieron que esta situación les hacía perder credibilidad en la reconstrucción y desintegraba a la comunidad. Para noviembre de ese año, era evidente que faltaba diálogo en un momento en que era necesario conversar.

Voces ciudadanas sobre los parquímetros en Medellín

En aquel 1999, Medellín también daba nuevas muestras de la necesidad de deliberar. La Secretaría de Tránsito empezó a cobrar por el parqueo de vehículos en la vía pública, algo que tomó por sorpresa a conductores, transeúntes y habitantes de las zonas afectadas con esa medida. La decisión parecía repentina y despertó agitadas polémicas, pero en honor a la verdad, no era algo nuevo.

Desde 1993, el Congreso de la República aprobó la Ley 105, que dictó disposiciones básicas sobre el transporte. En el artículo 28 de esa norma se lee: “Los municipios, y los distritos, podrán establecer tasas por el derecho de parqueo sobre las vías públicas, e impuestos que desestimulen el acceso de los vehículos particulares a los centros de las ciudades” (Ley 105 de 1993).

Esto le dio argumentos al Concejo de Medellín para instaurar “una tasa por el derecho de parqueo sobre algunas vías públicas” (Acuerdo Municipal número 38 [Concejo de Medellín], 10 de noviembre de 1994). La idea era destinar zonas de estacionamiento regulado para evitar la congestión que se presentaba en algunas calles por el parqueo incontrolado de vehículos.

Cinco años después, la Secretaría de Tránsito implementó la medida. Como sorprendió a buena parte de Medellín, *Voces ciudadanas* dialogó en concreto sobre los parquímetros y el interés común expresado en el manejo y uso de los lugares públicos. La Especialización en Periodismo Urbano de la Universidad Pontificia Bolivariana coordinó este proyecto y estableció

alianzas con El Colombiano, El Mundo, Hora 13, Informativo de Antioquia y CQN Noticias.

El objetivo general de esta versión de *Voces ciudadanas* fue identificar, mediante una deliberación pública, las opciones que mejor representarían el interés común frente a la instalación de parquímetros en varias calles. Los coordinadores diseñaron el proyecto para desarrollarlo en dos semanas y media.

La ejecución empezó con la publicación de informes periodísticos en los que se les plantearon dos preguntas a los ciudadanos: ¿Qué efectos cree usted que ha tenido la instalación de los parquímetros? y ¿qué mecanismos propone para regular el parqueo en la vía pública? Casi 800 personas llamaron a la línea telefónica habilitada para recibir las respuestas, y la mayoría estaba en contra de los parquímetros.

Después, los coordinadores del proyecto organizaron dos conversaciones con ciudadanos que representaban diferentes puntos de vista respecto a la medida que había tomado la Secretaría de Tránsito. Estos diálogos reflejaron críticas respecto a la ausencia de información sobre cómo la Alcaldía le adjudicó a una empresa privada el cobro del estacionamiento en vías públicas. Además, los participantes cuestionaron que los castigos predominaran sobre las medidas pedagógicas, pues los agentes imponían multas o retiraban vehículos en grúa cuando sus conductores excedían por escasos minutos el tiempo que pagaban de estacionamiento.

Voces ciudadanas consolidó una agenda en la que concluyó que “los parquímetros no son la manera adecuada de regular el parqueo en la vía pública”. Asimismo, recogió las propuestas que hicieron conductores, residentes, trabajadores, jubilados, estudiantes, comerciantes, peatones y clientes afectados por la medida para mejorarla. El alcalde de Medellín de ese entonces, Juan Gómez Martínez, recibió el documento en noviembre de 1999. Pasaron los meses y no hubo respuestas. El 22 y el 31 de marzo del 2000, los líderes del proyecto le escribieron al

secretario de Tránsito, Álvaro Álzate, para que los atendiera en una reunión privada para hablar sobre las inquietudes que manifestaron los ciudadanos. El 3 de abril, el funcionario respondió: "Considero que en este momento es inoportuno adelantar cualquier clase de conversación sobre este tema hasta tanto no haya un pronunciamiento del orden jurídico que nos permita establecer un diálogo directo sobre esta materia". El Gobierno local cerró la puerta de la conversación sobre los parquímetros.

2000

Voces ciudadanas. ¡Usted decide!

Aquel portazo que dio la administración municipal a *Voces ciudadanas* no desanimó la iniciativa de buscar espacios para dialogar, y menos en un año electoral. Para el 29 octubre del 2000 estaban programadas las votaciones de alcaldes y gobernadores, y la política era el principal tema de conversación. Las encuestas indicaban que los candidatos con mayor preferencia para conducir el gobierno de Medellín eran Luis Pérez, del Partido Liberal, y Sergio Naranjo, del Movimiento Renovación Democrática. Los sondeos también registraban aceptación por Sergio Fajardo, del Movimiento Compromiso Ciudadano, pero con el aval de la Alianza Social Indígena, y por Jaime Arrubla, del Partido Conservador.

Voces ciudadanas se alió con los medios CQN Noticias, El Mundo, Hora 13 e Informativo de Antioquia para recoger opiniones que alimentaran las propuestas de gobierno. El diario El Colombiano, que había participado en otras versiones del proyecto, se apartó esta vez con la justificación de que haría su propio cubrimiento electoral.

La UPB capacitó a 20 estudiantes de la Facultad de Comunicación Social - Periodismo respecto a los propósitos del periodismo cívico. Durante quince días, los alumnos recibieron inducción sobre la metodología para atender la línea telefónica, abordar entrevistas a profundidad y hacer sondeos. Después de practicar con pruebas piloto, quedaron encargados de aplicar cuestionarios a 600 ciudadanos de Medellín en diferentes zonas de la ciudad. Además, fueron los responsables de contestar las llamadas de la gente que decidiera participar. La labor que ellos desarrollarían era esencial para conocer las percepciones de los electores sobre las prioridades que debía atender el próximo alcalde.

El reto ahora era mayor, pues esta fue la primera vez que *Voces ciudadanas* trabajó con computadores para recoger las opiniones de los ciudadanos que se comunicaran a la línea telefónica. Esto implicó hacer varios ensayos que les ayudarían a los estudiantes a familiarizarse con la nueva tecnología y evitar inconvenientes que pudieran afectar los registros de las llamadas.

El 20 de junio del 2000 fue el lanzamiento de esta nueva versión del proyecto. Dos días después, los candidatos asistieron a la UPB para hacer público su compromiso de dialogar con la ciudadanía. A partir de ese momento, los medios de comunicación aliados publicaron una pregunta semanal para que la gente diera respuestas vía telefónica. La primera fue ¿cuál es el principal problema que debe resolver el próximo alcalde de la ciudad?, y 385 personas se comunicaron para dar su opinión al respecto. La segunda, ¿qué tema debería definir su voto por uno de los candidatos a la Alcaldía de Medellín?, recibió 175 respuestas. Para la tercera, ¿qué propone para crear empleo en Medellín?, los estudiantes atendieron 260 llamadas. La cuarta pregunta fue compuesta. Decía: ¿qué propone usted para disminuir la inseguridad en Medellín? ¿Qué tareas cree que debe

adelantar el alcalde para disminuir la inseguridad en Medellín? Esta vez, el número de ciudadanos que quiso expresar su punto de vista fue de 267. Y en la quinta semana, 207 contestaron el interrogante ¿qué propone usted para mejorar la educación en Medellín? La línea telefónica de *Voces ciudadanas* recibió 1294 llamadas. Después, los líderes del proyecto organizaron cinco diálogos con los ciudadanos. Tres de estas conversaciones fueron sobre desempleo, una respecto a la inseguridad y en la otra el tema fue la educación. En promedio asistieron once personas a cada encuentro.

El cruce entre los resultados del sondeo, las llamadas a la línea telefónica y las charlas permitió construir una agenda ciudadana. La mayoría de los que participaron en este ejercicio consideró que el desempleo es la causa de los principales problemas de Medellín, como la violencia, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Quienes compartieron esta percepción coincidieron en que, si había mayores oportunidades de trabajo, se resolverían todas las dificultades que afectaban a la ciudad.

Después de que los participantes establecieran que esta era la primera situación que debía resolver el próximo alcalde, hicieron sus propuestas. Advirtieron que hacía falta educación en artes y oficios, enfocada en el desarrollo empresarial y en el manejo de tecnologías, pero sin descuidar la parte humanista. Para ampliar la cobertura de dichos programas, los ciudadanos consultados dijeron que la formación debía ser gratuita y que hacía falta crear fuentes de empleo para los estudiantes.

Quienes compartieron sus opiniones en este ejercicio de *Voces ciudadanas* mostraron preocupación por la falta de oportunidades laborales para aquellos que ya superaban los 35 años. Por eso, propusieron capacitar y asesorar organizaciones comunitarias para crear nuevas fuentes de empleo en los barrios por medio de cooperativas, empresas comunitarias o microempresas, y con apoyo de la Alcaldía. Otras ideas que sur-

gieron para hacerle frente a la falta de trabajo fueron recuperar el campo, exportar producción agrícola, reducir importaciones, atacar el contrabando y fomentar el turismo. Además, consideraron la posibilidad de que la banca ofreciera créditos con intereses favorables y sin trámites engorrosos. Sumado a esto, plantearon que el Gobierno debía conformar un fondo solidario ciudadano para reactivar la construcción de obras públicas y de vivienda. Insistieron en la necesidad de acabar con la corrupción en la administración pública y de reducir impuestos a quienes empezaran un nuevo negocio y generaran empleo.

Los que aportaron su punto de vista en este proyecto coincidieron en que el segundo problema en Medellín era la inseguridad. Insistieron en que su principal causa era el desempleo, pues "si no existen oportunidades, la gente hace todo lo necesario para sobrevivir", según dice en uno de los informes de esta versión de *Voces ciudadanas*. Los consultados propusieron aumentar las posibilidades laborales para hacerle frente a esta situación. Además, reclamaron mayor presencia de policías en los barrios para hacer retenes, requisar y vigilar con agentes vestidos de civil o por medio de videocámaras. Fuera de eso, los que opinaron vía telefónica y en los conversatorios pidieron diálogo entre el Gobierno y los actores armados para ofrecerles educación y nuevas opciones de vida si dejaban sus actividades delictivas.

El tercer problema que identificaron los ciudadanos que ofrecieron sus opiniones fue la falta de calidad de la educación. Ellos asociaron esta situación a la escasa capacitación de los docentes, sus deficientes condiciones laborales y la poca infraestructura necesaria para garantizar la asistencia de los jóvenes a las aulas. Las personas que participaron en *Voces ciudadanas* propusieron reforzar la formación en artes, tecnología, inglés, ciencias puras y, sobre todo, investigación, desde los grados más pequeños hasta terminar el bachillerato.

Además, abogaron por mejorar salarios para los profesores e intensificar su exigencia académica, ofrecer acceso gratuito a la educación o, al menos, reducir los costos de las matrículas y los requisitos para obtener créditos. Una de las mayores exigencias para el próximo alcalde fue construir nuevas escuelas y bibliotecas en los barrios.

En los dos meses y medio que duró este proyecto participaron casi 1300 ciudadanos por medio de la línea telefónica y unos 50 asistieron a las conversaciones ciudadanas. Todos ellos dieron un paso más allá en la participación, pues no se limitaron a quejarse o expresar inconformidades, sino que plantearon soluciones. Esto era lo que buscaban las preguntas que se les plantearon. Los medios de comunicación más comprometidos fueron, en su orden, CQN Noticias, El Mundo, Hora 13 e Informativo de Antioquia. Ellos les dieron más protagonismo a las ideas de la gente que a las percepciones de expertos. Esta vez fue más claro que el espíritu de esta práctica era darle espacio a cualquier persona que decidiera expresar sus puntos de vista sin pretensiones científicas, sino de opinión. Los candidatos estuvieron disponibles para responder todos los requerimientos de *Voces ciudadanas*, compartieron la filosofía del proyecto y mantuvieron una relación respetuosa. En últimas, la agenda ciudadana recogió propuestas viables y provechosas para toda la comunidad.

2001

Voces ciudadanas. ¡Usted planea!

En las elecciones locales del 2000, el liberal Luis Pérez obtuvo la máxima votación y fue nombrado alcalde de Medellín. Al año siguiente, presentó su Plan de Desarrollo Municipal, que

se conformaba por tres ejes: cultura ciudadana, competitividad y espacio público. La Especialización en Periodismo Urbano de la UPB, los periódicos El Mundo, El Tiempo y El Colombiano, y el programa Metropolitanas, de Telemedellín, se aliaron para adelantar una nueva versión de *Voces ciudadanas*. El canal regional no participó en esta ocasión. El noticiero Hora 13, frecuente aliado, no contaba con suficiente personal y Teleantioquia Noticias quedó bajo la dirección de un periodista que llegó de Bogotá y desconocía la lógica del proyecto.

La prensa fue, entonces, la principal socia. Esta vez, los objetivos eran explicar el Plan de Desarrollo, promover su debate y revisar si la iniciativa del nuevo mandatario incluía la agenda que construyeron los electores durante la campaña.

El proyecto empezó con un panel amplio para recapitular las propuestas de los ciudadanos y analizar las del alcalde. Después, los medios publicaron la síntesis del Plan de Desarrollo y les hicieron preguntas a los ciudadanos en relación con cada eje. La línea telefónica habilitada para recibir respuestas atendió en total 146 llamadas (64 sobre cultura ciudadana, 33 acerca de la competitividad, 42 en relación con el espacio público y 7 en cuanto a otros asuntos). Los resultados fueron similares a los registrados en la versión anterior de *Voces ciudadanas*.

Después, los coordinadores del proyecto programaron cuatro conversaciones. A cada reunión asistieron diez personas, que analizaron a profundidad el Plan de Desarrollo. La conclusión a la que llegaron fue que las propuestas del nuevo alcalde sí incluían la agenda ciudadana que construyó *Voces ciudadanas* durante la campaña, en el proyecto ¡Usted decide! Luego de tener esto claro, quienes participaron en los diálogos decidieron proponerle al mandatario Pérez que enfocara su gestión en el empleo y la educación para facilitar la solución del resto de problemas de Medellín.

2003

Voces ciudadanas. ¡Vive el fútbol!

Los brotes de violencia no dejaban de aparecer. Además del conflicto entre grupos armados ilegales, narcotraficantes y fuerza pública, el fútbol se convirtió en un estímulo de ira. Los espacios de recreación y deporte escaseaban en Medellín. El estadio Atanasio Girardot era un referente de encuentro social y de diversión accesible para todos los habitantes de la ciudad, pero las constantes riñas entre hinchas volvieron intransitables los sectores aledaños a aquel lugar.

El fenómeno de las barras bravas era común en Argentina, Alemania, Holanda e Inglaterra. En Colombia, los grupos de hinchas violentos adaptaron a su manera símbolos, canciones, vestuarios y comportamientos como una forma de hacer catarsis social con el fútbol como pretexto. Ante este panorama, *Voces ciudadanas* formuló el proyecto ¡Vive el fútbol!, con la idea de abrir espacios de diálogo entre autoridades y afectados, involucrados o responsables de este problema. Los objetivos de aquellas conversaciones era comprender las razones que despertaban las actitudes agresivas de los aficionados y diseñar una agenda ciudadana en la que los implicados asumieran responsabilidades en las posibles soluciones.

A esta versión se vincularon los periódicos *El Tiempo*, *El Mundo* y *El Colombiano*, que ya habían participado en ocasiones anteriores. También se unieron los noticieros *Hora 13*, *Telemedellín* y *Teleantioquia*, los programas *Enlace*, *Alerta Antioquia* y *Wbeimar lo dice*, y las emisoras *Antena 2* y *Caracol Radio*. Además, participó la Secretaría de Cultura Ciudadana.

Antes de empezar a convocar a los ciudadanos, los coordinadores del proyecto identificaron los grupos y sujetos involucrados. En este caso aparecieron algunos implicados de

forma directa en el problema, como hinchas generadores de violencia; vecinos, venteros o comerciantes perjudicados por el vandalismo, y clubes deportivos, representados por presidentes, directores técnicos, jugadores y árbitros. Otros actores detectados fueron los periodistas deportivos, narradores y comentaristas con incidencia en el comportamiento de las masas, y las autoridades encargadas de velar por el orden y la seguridad. Además, la formulación del proyecto incluyó los públicos atentos, compuestos por posibles interesados en comunicarse con la línea telefónica para responder las preguntas divulgadas por los medios de comunicación.

El 3 de marzo de 2003 empezó la ejecución de ¡Vive el fútbol!, el séptimo proyecto de *Voces ciudadanas*, que duró tres meses. Los medios de comunicación publicaron cinco preguntas y la línea telefónica recibió mil llamadas. El primer interrogante fue ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de ir a fútbol? Los ciudadanos respondieron que lo bueno era el espectáculo, la diversión, el apoyo a los equipos y pasar el momento en familia y con amigos. Lo malo y lo feo eran las barras con su comportamiento agresivo, la violencia, y el consumo de drogas y alcohol en las tribunas, según dijeron quienes se comunicaron para exponer sus puntos de vista.

La segunda pregunta fue ¿por qué cree que hay violencia en el fútbol? Las opiniones más frecuentes apuntaron a la intolerancia de hinchas, las barras y los jugadores que no soportan ver perder a sus equipos. Otras respuestas dijeron que los comportamientos agresivos eran consecuencia de los comentarios incendiarios de periodistas deportivos y del consumo de drogas y alcohol en el estadio.

El tercer cuestionamiento fue ¿qué propone para solucionar la violencia en el fútbol?, y el cuarto, ¿qué le propone usted a las barras, los jugadores y los periodistas para solucionar la violencia en el fútbol? Los comentarios al respecto fueron diversos. Algunos ciudadanos plantearon medidas conciliadoras

con las barras, como llegar a acuerdos de no agresión, generar espacios de convivencia, educar, carnetizar y cambiar la indumentaria. Otros fueron más tajantes y hablaron de impedirles el ingreso al estadio a hinchas violentos, drogados o ebrios y prohibir la venta de drogas y licor dentro del escenario deportivo. Sin embargo, los ciudadanos reconocieron que no toda la violencia depende de los aficionados. Por eso, propusieron, además, moderar el lenguaje de los comentaristas y locutores de los medios de comunicación, y vigilar a los árbitros para evitar decisiones controversiales que alteraran los ánimos de las masas. Al tiempo, algunos de quienes ofrecieron sus puntos de vista consideraron necesario reforzar la seguridad y regular la venta de boletas para ingresar al estadio.

Y la quinta pregunta fue ¿cómo le gustaría a usted que fuera un día de fútbol en Medellín? Las respuestas coincidieron en que fuera un día tranquilo, en orden, paz y alegría, sin violencia en la cancha ni en la tribuna, como si fuera un festival.

Después, los coordinadores del proyecto programaron 20 conversaciones con los diferentes actores por separado. A estos encuentros asistieron cien personas. Toda la información recogida en estos diálogos, más las opiniones de quienes llamaron a la línea telefónica, permitió construir una agenda. El documento en este caso fue particular porque no solo buscaba soluciones de parte de las autoridades, sino también de ciudadanos, periodistas, jugadores, educadores y padres de familia. Además, en esta ocasión los participantes definieron asuntos críticos y propositivos para los sujetos involucrados en el problema.

De acuerdo con los diversos comentarios, a los locutores y comentaristas deportivos les hacía falta ética y profesionalismo porque utilizaban un lenguaje bélico, favorecían determinados equipos o jugadores y cometían errores al interpretar los hechos. Las propuestas al respecto fueron que los ciudadanos vetaran a quienes incitaran al odio por medio de los micrófonos.

Quienes participaron en este proyecto consideraron que los jugadores estimulaban a la rabia en las tribunas. La sugerencia fue trabajar con pedagogía para incentivar el respeto entre futbolistas adversarios en el terreno de juego.

Los ciudadanos advirtieron que, al parecer, la violencia enorgullece a las barras bravas y por eso actúan de manera agresiva. Para contrarrestar esta conducta, propusieron darles premios, como descuentos en las boletas, a los hinchas que aportaran a la tranquilidad en el estadio.

En la agenda también se estableció que la policía actuaba con prejuicio contra los aficionados y los consideraba delinquentes en potencia. La invitación a este respecto fue establecer alianzas entre comités de las barras y las autoridades para trabajar por la paz en el fútbol, e impulsar campañas de convivencia.

2006

Voces ciudadanas por la calidad de vida, la equidad y la inclusión social

Mediante un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana implementó la metodología de *Voces ciudadanas* para adelantar un debate público en torno a las percepciones ciudadanas sobre la pobreza, la equidad y la inclusión social. En 2006, este proyecto incluyó al ciudadano del común no solo en el análisis del problema de la pobreza para buscar soluciones, sino para establecer si había una manera de abordarlo desde la ciudadanía, que marcara una diferencia respecto al discurso de los expertos del Gobierno, de los investigadores y las agencias que se han ocupado del tema. Este proyecto contó con el apoyo de

los siguientes medios: El Colombiano, El Mundo, El Tiempo, Teleantioquia Noticias, Telemedellín, RCN radio y Caracol radio.

El trabajo comenzó con una encuesta de preguntas abiertas para indagar sobre las perspectivas ciudadanas en torno a la pobreza, lo que significaba esa condición, cuáles eran las causas y qué se debería hacer para enfrentarla. En este sondeo participaron 596 personas con sus respuestas. Mediante la línea telefónica se recibieron respuestas a cuatro preguntas abiertas en torno a las mismas cuestiones de la primera consulta, las cuales fueron publicadas en los medios de comunicación, cuya invitación motivó 409 llamadas.

A partir de los perfiles socioculturales definidos con las tendencias descritas por los primeros análisis de resultados, se entrevistó a ocho ciudadanos en profundidad. Sus testimonios permitieron construir historias de vida que constituyeron insumos para comprender algunas circunstancias relacionadas con la condición de pobreza.

A la par, se hicieron 15 conversaciones con los ciudadanos sobre las tendencias de opinión identificadas antes en la línea telefónica. Para discutir la primera versión de la agenda ciudadana, se invitó a participar a más de 50 personas que llamaron y 20 aceptaron hacerlo de nuevo en el panel de ciudadanos, que luego presentaría la agenda ciudadana derivada de la discusión.

A lo largo del ejercicio y a partir de los resultados y hallazgos que se iban estableciendo, los medios participantes publicaron entrevistas, notas en informativos de televisión, reportajes en prensa escrita, que permitieron animar la discusión y también recoger sus principales resultados, los cuales se sintetizan en las siguientes líneas.

Según revelaron los primeros sondeos, la generación de empleo y la creación de empresas es un aspecto clave y una de las principales causas de la pobreza, cuando se detectó una tensión entre la demanda de empleo y la aspiración de prepararse para el trabajo o el trabajo autónomo, que tiene

que articular acciones educativas que preparen para la vida y para el trabajo en un sentido amplio.

Otro aspecto clave es el de la educación. Para la mayoría de los ciudadanos participantes, esta debe ser la principal estrategia para enfrentar la pobreza, destacando derechos humanos, educación para el trabajo, artes y oficios, en estrecha relación con las demandas del contexto y una mejor articulación de la formación académica con las necesidades laborales y la vocación productiva de la ciudad.

La recreación y cultura también aparecieron en la discusión, pues para los ciudadanos, el problema de la pobreza va más allá de la relación con las necesidades básicas. Desde los primeros sondeos apareció la idea de que hay una pobreza espiritual que no permite reconocer alternativas de vida en escenarios basados en el pensamiento crítico y creativo. Por eso, es importante mejorar la oferta cultural y recreativa de la ciudad, más allá de una diversión asociada al consumo de licor.

Otras líneas de discusión confluyen en lo que se llama un “cambio de mentalidad” pues invitan a una revisión del papel de las iglesias en relación con el manejo y la percepción del problema de la pobreza, para reenfocar su labor en la promoción de la autonomía y las capacidades de los sujetos. En relación con ello, otra línea fue la del control de la natalidad, para lo cual se plantearon políticas en salud y educación sexual y reproductiva.

En la misma línea, los ciudadanos propusieron alternativas para dinamizar la economía mediante trueques y convites, entre otras formas de economía solidaria para la inclusión social, lo cual se vincula con la propuesta de fortalecer las condiciones para el retorno de quienes emigraron de él.

Desde un principio de corresponsabilidad, otras líneas de las propuestas plantean la erradicación del hábito de la limosna, para eliminar las prácticas de explotación que giran en torno a ella que solo perpetúan el problema de la pobreza.

Asociado a ello está otra línea que plantea la importancia de que el Estado envíe mensajes contundentes para el buen uso de los recursos públicos, mediante una estrategia decidida de lucha contra la corrupción, con el apoyo de la ciudadanía a través de veedurías ciudadanas como interlocutoras legítimas y con alcance real. Todo esto como parte de un cambio de mentalidad hacia el fortalecimiento de las capacidades de las personas para satisfacer sus necesidades con soluciones basadas en principios de corresponsabilidad.

Con estos resultados y el papel de la Secretaría de Cultura Ciudadana como estamento ejecutivo de las políticas públicas en materias relativas a las antes enunciadas, esta consulta tuvo efectos en el fortalecimiento de las políticas públicas y los modelos de atención de la pobreza en Medellín.

2007

Voces ciudadanas. Plan Decenal de Educación

La Ley 115 de 1994 estableció en su artículo 72 que, al menos cada diez años, el Ministerio de Educación Nacional coordinaría la construcción de un plan para guiar la enseñanza en el país. Ese documento debía consignar los anhelos de los ciudadanos y lo que esperaban recibir del servicio educativo. El Gobierno nacional tenía la labor de trazar una nueva ruta entre 2006 y 2016 a partir de un diálogo amplio.

Los funcionarios del Ministerio, encargados de invitar a la conversación, diseñaron una metodología conformada por cuatro momentos. El primero fue de documentación, en el que hicieron un balance del plan que se ejecutó entre 1996 y 2005. El segundo consistió en definir los temas a debatir según sugerencias de expertos. En la tercera fase abrieron el deba-

te público, que incluyó mesas de trabajo, foros virtuales y la aplicación del procedimiento de *Voces ciudadanas* para recoger propuestas de la gente. Y la cuarta etapa fue la concertación del Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) 2006-2016 (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2007).

El equipo de *Voces ciudadanas* formuló un proyecto específico para construir una agenda nacional como aporte a la guía para la educación en los próximos diez años. Esta vez, fueron convocados ciudadanos de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín, Neiva, Pasto y Pereira. A partir del 9 de abril de 2007, medios de comunicación locales publicaron preguntas para que las personas interesadas en expresar sus opiniones se comunicarán vía telefónica o a través de una página web. El primer interrogante fue ¿qué propone para mejorar la educación en Colombia? De cada cien respuestas, 28 coincidieron en reformar o derogar el Decreto 230 de 2002, que reglamentaba la enseñanza en el país, 11 convinieron en formar en valores, y 6, en capacitar a los docentes. La segunda pregunta fue ¿qué es lo más importante en la formación de los jóvenes hoy? En esta ocasión, 35 de cada cien comentarios se refirieron a la educación en valores; 24, a la actualización de métodos y contenidos; 12, a la exigencia, y 11 a la preparación de docentes. Y la tercera consulta fue ¿qué cree que necesitamos aprender los colombianos en los próximos 10 años? De cada cien contribuciones, 41 apuntaron a la formación en valores; 7, al uso de tecnología, y 6, a competencias laborales. Las demás observaciones fueron minoritarias. El equipo de *Voces ciudadanas* recibió en tres semanas un total 13 287 llamadas y 1090 correos electrónicos con los puntos de vista de quienes decidieron participar.

Después de identificar esas primeras corrientes de opinión, vino un momento de diálogo. En aquellas mismas ciudades, los coordinadores del proyecto organizaron 30 conversaciones a

las que asistieron 424 ciudadanos, entre los que había diversidad en edades y ocupaciones.

Las ideas más frecuentes en las llamadas, los correos y la deliberación fueron el insumo para construir una agenda ciudadana. Las propuestas se enfocaron en aumentar la exigencia para los estudiantes, capacitar mejor a los docentes, reforzar la enseñanza en valores y promover el acompañamiento de los padres en el proceso formativo. Las personas que ofrecieron sus opiniones también coincidieron en que era necesario diversificar las metodologías académicas, ampliar la cobertura e invertir más presupuesto en instituciones educativas. Además, requirieron la incorporación de tecnologías en las aulas y plantearon entender a los estudiantes como nuevos sujetos que reclaman una educación acorde con su época.

La agenda ciudadana quedó consignada en un documento que luego recibió el Ministerio de Educación como aporte al plan decenal. Todas las propuestas de expertos, instituciones y personas que participaron en foros, mesas de trabajo y conversaciones enriquecieron la línea que trazó el gobierno nacional para la educación entre 2006 y 2016.

2013-2014

Contexto

En Medellín, Aníbal Gaviria ejercía su mandato como alcalde bajo las mismas premisas de la lucha por la equidad y la defensa de la vida, con las cuales gobernó el departamento de Antioquia entre 2004 y 2007. En esa medida, una de las prioridades de su gestión fue cerrar las brechas sociales, expresadas en diferencias de ingresos y de acceso a servicios públicos e infraestructura de uso comunitario.

En esa línea, uno de los programas bandera del gobierno local era el de las Unidades de Vida Articulada, que incluyó sectores de estrato socioeconómico bajo como Sol de Oriente en la zona centroriental, y alto, como el barrio El Tesoro, en las laderas de la comuna El Poblado. Esta intervención en infraestructura, acompañada de un plan de intervención social, de manera simultánea, puso en discusión el crecimiento de la ciudad.

Según el informe de la veeduría Medellín Cómo Vamos (2014), los niveles de desempleo en el año mostraban una tasa a la baja y una menor informalidad, en medio de las transformaciones, por lo que el informe llama *empleo moderno* al fenómeno asociado al auge de las plataformas tecnológicas para la prestación de diferentes servicios, que se vincula a los planes que desde entonces había para Medellín como centro de innovación tecnológica.

En este contexto, el gobierno de la ciudad se ocupó en priorizar la atención de necesidades básicas insatisfechas de forma integral, propósito relacionado con programas del Gobierno nacional como Familias en Acción y todo el componente de intervención social derivado de los Acuerdos de Paz de La Habana. Es importante considerar que Medellín se proyectaba como la segunda ciudad receptora de firmantes de dichos acuerdos con las antiguas Farc y que ha sido uno de los principales destinos de migración desde otras regiones de Antioquia y del país.

Estos factores incidieron, por ejemplo, en la priorización de retos para la cobertura y prestación de servicios de salud asociados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos para el año 2015. Según el informe *Medellín Cómo Vamos* (2014), se requerían esfuerzos adicionales en materia de promoción y de prevención para reducir las principales tasas y causas de mortalidad: enfermedades de los sistemas

circulatorio, cerebrovascular y respiratorio. Ya el debate sobre la calidad del aire se perfilaba como factor clave en políticas futuras de movilidad, gestión ambiental, ordenamiento territorial y gestión del transporte público en la ciudad.

La inserción al mundo laboral, la cobertura educativa y los niveles de inseguridad fueron los principales retos para el plan de gobierno de la época. Varios aumentos de la violencia homicida se asociaban a la suerte de miles de excombatientes de las Farc y la consecuente reorganización de poderes ilegales en los territorios de influencia, incluidos los de la ciudad de Medellín. No obstante, hubo progresos en la reducción de homicidios y otros delitos como el desplazamiento forzado intraurbano y el robo de vehículos, al tiempo que aumentaron los robos en vía pública, a entidades comerciales y financieras, como indicios de la persistencia de criminalidad organizada.

Por otro lado, según la veeduría ciudadana Medellín Cómo Vamos, en medio de muchos debates sobre la calidad del servicio y el manejo de las cifras oficiales, en 2014 hubo menos deserción y repitencia escolar, de manera especial en los niveles de educación básica y media.

La entrada en vigencia de un Plan de Ordenamiento Territorial incluyó cambios estructurales y una nueva cartografía que lo hace incomparable con los planes de períodos anteriores; sin embargo, las cifras recogidas por Medellín Cómo Vamos muestran que la deficiencia de viviendas con acceso a servicios de saneamiento básico en 2014 era de 27,5 %, mayor en un 2 % respecto a 2013; y, en el caso del índice de espacio público, Medellín contaba con un índice de 3,5 metros cuadrados por habitante, mientras que el POT establecía una meta de 15,6 metros cuadrados de espacio público efectivo, una meta considerada ambiciosa, como los proyectos emprendidos por la administración municipal, incluidas intervenciones urbanísticas como las de Ciudad del Río y Naranjal y del proyecto denomina-

do Parques del Río, que se dejó planificado y gestionado en su primer tramo, correspondiente a la conexión entre los barrios Conquistadores y el sector de La Alpujarra.

Asociado a esto, estaban los progresos del sistema integrado de transporte público con la culminación del Tranvía de Ayacucho y los cables complementarios hasta el oriente de la ciudad, junto con las estaciones de Metroplús en el sector de Industriales, así como la construcción de 10,9 km de vías, un crecimiento significativo en comparación con 2013. Se planteó también el reto de modernizar el Sistema Integrado de Transporte del Valle Aburrá, mediante cuencas conectadas con los demás municipios, un plan que perfilaba la necesidad de un consenso para consolidar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad única en temas de medioambiente y movilidad, en principio, para toda la subregión.

El manejo de las finanzas públicas recibía conceptos favorables, para lo cual fue determinante la aprobación del proyecto de fusión de Une y Millicom, que representó ingresos para la ciudad por 1,4 billones de pesos y sostuvo el nivel de inversión pública por habitante por un año más desde 2008.

Se hacía urgente debatir la planificación urbana e implementar tecnologías limpias para la movilidad y la producción, en relación con el derecho a la salud de los ciudadanos. Por ello se emprendieron acciones en ambas materias, así como para la promoción de nuevas industrias, en el marco de las políticas de innovación y emprendimiento.

Al tiempo, la ciudad recibía una creciente migración desde Venezuela y asociada al tránsito de personas desde Centroamérica y África, en conexión con el delito de trata de personas y otras expresiones criminales asociadas a fenómenos de violencia en regiones como el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el Urabá chocoano, cuyos efectos retaron la gestión del desarrollo social de Medellín en los siguientes años.

2013-2 a 2014-1

Voces ciudadanas por el POT

Entre la Secretaría de Planeación Municipio de Medellín y la Universidad Pontificia Bolivariana mediante sus grupos de investigación GIDATI (Grupo de Investigación Desarrollo de Aplicaciones en Tecnologías de la Información y la Comunicación), GICU (Grupo de Investigación en Comunicación Urbana) y Territorio, se estableció un convenio para hacer seguimiento, gestión y análisis de la opinión de los ciudadanos sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Medellín.

Una novedad significativa es que el acuerdo contemplaba el trabajo con mecanismos de "e-Participación ciudadana" (TPE POT E-PARTICIPACION, 2013), en consideración al modo en que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) contribuyeron en los últimos años a la creación de nuevas formas de relación e interacción entre los gobiernos y la sociedad civil, lo que de manera popular se conoce como *redes sociales*, de nuevos espacios de incidencia a todo nivel sobre las decisiones públicas.

El fundamento era la investigación existente a la fecha desde las ciencias sociales y las ingenierías, que demostraban las propiedades del uso de las redes en la identificación y análisis de fenómenos sociales (Kauchakje et al., 2006, p. 1). De hecho, según los informes de la época, era la primera vez, desde el origen de la legislación sobre la planeación del ordenamiento territorial en Colombia (Ley 388 de 1997), que las TIC se pudieron considerar como herramienta para promover la participación en el diseño del POT de la ciudad.

Esto condujo a proponer estrategias con dicho propósito, es decir, con un diagnóstico de públicos mediante un seguimiento diario de las redes sociales y recolección de datos en espacios

virtuales y de diálogo sobre el tema. Estas tareas fundamentaron la construcción conjunta, con el grupo GIDATI, de la metodología ePARTEDI (capítulo 8 de este libro), que sintetizaba en un manual operativo cómo procede el reconocimiento de difusores y amplificadores del debate en lo digital, el análisis de la información recogida en torno a estos, la construcción de sus contenidos y la aplicación de métricas e indicadores de medición (GIDATI y GICU, 2014). De esa forma, se descubrieron los rasgos y posibilidades del uso de plataformas como Twitter y Facebook, más allá de los indicadores de audiencia e interacción, que también se midieron como parte del ejercicio.

Los informes de la época (TPE POT E-PARTICIPACION, 2013a) también dan cuenta de los debates suscitados sobre los rasgos y alcances de estas nuevas formas de participación, a la luz de las rutinas del debate (franjas horarias, por ejemplo) y sus maneras (sentido de las publicaciones, entre otros rasgos).

Este análisis en torno a qué se dice y cómo se dice en el debate público, en las redes, suscitó abordajes detallados sobre sus componentes y fines; interés y demanda en torno a la participación de actores específicos mediante las plataformas digitales; y el modo en que se plasmaban y hacían efectivas las relaciones de poder entre los actores deliberantes en lo digital (TPE POT E-PARTICIPACION, 2014). En especial, estos dos últimos aspectos permitían analizar los detalles cualitativos del debate, en diálogo con las métricas y datos similares como la georreferenciación de las participaciones, lo cual fue posible gracias al uso de herramientas de análisis de datos como NVivo.

Dicha experiencia permitió establecer hallazgos valiosos para el debate y la comunicación pública en el ciberespacio: el uso de perfiles específicos para definir estrategias de divulgación de las diferentes iniciativas de Planeación Municipal, según los intereses de los distintos actores; el reto de que, a pesar de la inmediatez de la comunicación, haya información veraz, suficiente, adecuada y oportuna, como base de una

interacción mutuamente formativa y no solo en un ejercicio de mera información y divulgación unidireccional (TPE POT E-PARTICIPACION, 2014).

Es importante mencionar que este ejercicio no tuvo participación de medios de comunicación, todo el ejercicio se construyó en el ciberespacio, aprovechando los medios digitales, pero, sobre todo, realizando un riguroso seguimiento a las redes sociales, aplicando una metodología a la inversa, es decir, iniciando por los *influencers* para, desde ahí, llegar a los seguidores y, sobre todo, a sus comentarios.

2014-2

Voces ciudadanas por la seguridad y la convivencia (II)

Un proyecto precedente en 2003 aportó elementos para comprender las complejidades de las causas y manifestaciones de la inseguridad en la ciudad. Esta nueva versión planteó “desarrollar un proceso de formación de cultura política, de opinión pública y fomento de la participación ciudadana alrededor de la seguridad y la convivencia en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá, con la participación de los medios masivos de información y los nuevos medios digitales” (*Voces ciudadanas*, 2014, p. 8).

A ese propósito se atribuye el que comenzaran a reconocerse nuevas voces desde medios de comunicación no tradicionales. En el diálogo con once medios de comunicación aliados, se definieron 15 preguntas en torno a experiencias, propuestas y concepciones que había sobre la seguridad y los hechos que la afectan, así como las percepciones de esta en la ciudad. Las consultas también sondearon el conocimiento de las personas sobre la oferta institucional para tramitar las necesidades en la materia, en especial las denuncias.

Los desarrollos tecnológicos de la época permitieron adelantar foros virtuales y presenciales. Las plataformas de correo electrónico, Facebook, Twitter, YouTube y Google+ ayudaron a divulgar preguntas, informes de resultados y recibir 702 respuestas de 1114 seguidores del proyecto.

Como las conversaciones por lo general implicaban denuncias de delitos, se realizaron foros en Copacabana, Medellín, Sabaneta y Bello, con 135 ciudadanos.

Treinta y cuatro entrevistas a participantes en ambos foros y habitantes de sectores rurales en La Estrella, Sabaneta, Envigado y el corregimiento San Antonio de Prado en Medellín completaron el insumo para conocer la forma en que los ciudadanos perciben a su territorio, al Estado y a las autoridades gubernamentales; asimismo, se construyó la agenda ciudadana con las propuestas de los habitantes del Vallé del Aburrá en los ejes de territorio, comunidad, gobierno, pedagogía, seguridad, vigilancia, fuerza pública, empleo y educación.

Entre las propuestas de la agenda ciudadana se destaca una planeación sostenible del territorio, con mecanismos efectivos para su control, mayor prioridad a la dotación pública para la recreación y la cultura, y otras actividades que permitan habitar sin mayores temores la ciudad, en una acción de gobierno que garantice su continuidad.

Aparecen también programas culturales, colectivos y barriales para colaborar con las autoridades en la preservación de la seguridad y el orden, acciones educativas complementarias a lo normativo que subrayan la corresponsabilidad y el respeto a los derechos del otro, sobre todo el derecho a la vida; además de espacios para construir una relación cercana con las autoridades policiales de cada sector.

Asimismo, se propuso incluir controles efectivos a la gestión de las autoridades, en una gestión orientada a la convivencia, acorde con cada comunidad, para que sean efectivas las acciones contra el crimen organizado y que impactan en las dinámicas cotidianas del territorio.

A ello se suman el aumento del pie de fuerza, mayor preparación y mejor supervisión al trabajo de los miembros de la Fuerza Pública, tanto para sus labores operativas como para el relacionamiento con las comunidades, en el que se destaque el uso de la tecnología y la corresponsabilidad de los establecimientos comerciales y las entidades financieras en ese propósito, todo en un contexto de gestión pública transparente y articulada en el territorio del Área Metropolitana.

Esto en complemento con cambios normativos para la disuasión, sanción ejemplar del delito, en especial ante situaciones de reincidencia y en favor de los derechos de las víctimas; con notable mejoramiento de la infraestructura carcelaria y diversas modalidades de reclusión para impulsar verdaderos procesos de resocialización mediante colonias agrícolas, por ejemplo. Esto en relación con un sistema de denuncia ágil, en el que también se pueden instaurar a título grupal para proteger a las personas afectadas por delitos de alto impacto colectivo.

Vale la pena destacar que los avances tecnológicos permitieron fortalecer la metodología de *Voces ciudadanas*, en especial para la sistematización de la información, pues ya los desarrollos de la metodología ePARTEDI estaban en un punto de consolidación suficiente como para que divulgaran sus aportes científicos en una publicación que se haría en el año siguiente.

2014-3

Voces ciudadanas. Educación, compromiso por la excelencia en Barrancabermeja

Para el proyecto de Construcción del Modelo Educativo Integral para la ciudad de Barrancabermeja se adelantó una consulta ciudadana bajo la metodología de *Voces ciudadanas* por gestión de la Unidad de Transferencia en Comunicación de la Facultad

de Comunicación Social - Periodismo, en alianza de las Escuelas de Ciencias Sociales y la de Educación y Pedagogía. Aunque no tuvo participación directa del GICU, bien vale considerarlo como un ejemplo de la trascendencia de esta metodología de periodismo público.

Barrancabermeja, puerto petrolero de Colombia, se propuso la construcción participativa de un Modelo Educativo Integral, para definir políticas de cultura ciudadana alrededor de la educación, en el marco de las estrategias del Gran Acuerdo Social Barrancabermeja, ciudad región –100 años–. La Secretaría de Educación, Ecopetrol y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín suscribieron un convenio que tenía como una de sus metas la participación ciudadana por el mejoramiento de la educación.

Durante cuatro semanas, desde diversas plataformas de los medios de comunicación aliados, se formularon preguntas para indagar con los ciudadanos cuál es el papel de la educación, los actores responsables de su calidad, sus oportunidades y retos, y las ideas para mejorarla en un horizonte de 10 años.

Los ciudadanos respondieron mediante llamadas telefónicas, redes sociales, correos electrónicos y encuestas presenciales, con el impulso de 25 espacios en medios locales que se vincularon al proyecto y que participaron en capacitaciones con profesores de la UPB.

La cartilla editada con la agenda ciudadana derivada de la consulta incluyó los aspectos más destacados, según la cual la educación es percibida como un eje de desarrollo territorial que mejora la calidad de vida de las personas, pues el conocimiento proporciona habilidades y técnicas para un desempeño competitivo que aumenta las posibilidades de los habitantes para encontrar un trabajo que supla sus necesidades para ser parte de la construcción de un municipio equitativo y justo.

Dice la consulta, además, que la educación presenta algunos problemas en su planeación, ejecución y proyección.

Por eso, los ciudadanos proponen una enseñanza apropiada y adaptada a las necesidades reales de las personas, con cuatro factores clave: los actores, como responsables del aprendizaje; los programas educativos y su pertinencia con el municipio; el entorno, comprendido como el contexto y las realidades que afectan el desempeño del aprendizaje; y los cambios en los paradigmas o modelos educativos.

Las propuestas apuntan al mejoramiento de las herramientas de todos los actores involucrados en el proceso educativo, desde los padres de familia hasta los docentes, mediante la formación, el acompañamiento constante y, también, la corresponsabilidad acompañada de consecuencias efectivas ante el incumplimiento de los compromisos pertinentes.

En lo relativo al contenido, se destaca la búsqueda de la pertinencia e integralidad, en relación con el contexto y la importancia del componente técnico y humano, en especial en lo que corresponde a las competencias ciudadanas. Esto de la mano con metodologías dinámicas, enfocadas en los aprendizajes significativos, la relación con el contexto, con particular énfasis en el territorio y los retos que suponen los desarrollos tecnológicos. Todo en un ambiente de acceso pleno a recursos educativos y de logística, sobre todo de transporte y alimentación.

Lo anterior, como parte de una idea integral de calidad, que abarque desde las condiciones antes citadas hasta los mecanismos efectivos y permanentes de evaluación, que eleven el nivel de los procesos académicos y los resultados, en relación con el contexto de competitividad que reta a una ciudad con vocación industrial y agrícola.

Este proyecto, en el que participaron entidades públicas y que tuvo la cofinanciación de Ecopetrol, tuvo una destacada proyección en el territorio y permitió probar las posibilidades de *Voces ciudadanas* como una herramienta para obtener insumos para planear el desarrollo social y diseñar políticas públicas.

2015

Contexto

En 2015 terminó el gobierno de Aníbal Gaviria como alcalde de Medellín y las mayorías electoras interpretaron la elección de Federico Gutiérrez como la consolidación de una tendencia de gobierno asociada a la independencia de los partidos tradicionales. Gutiérrez fue elegido por el movimiento Creemos, proclamado como distante de estos organismos, a pesar de su afinidad con las ideas de algunos de los líderes tradicionales de la región y del pasado del candidato en las filas del partido que entonces gobernaba en Colombia. En esta situación, es necesario destacar el papel que jugaron los jóvenes como masa crítica que movilizó la votación por Gutiérrez, lo que les posicionó también como un actor determinante en el debate político en torno al gobierno local.

Aníbal Gaviria había logrado consolidar en torno a su gestión en la Alcaldía una serie de consensos que permitieron el desarrollo de sus iniciativas más importantes, con banderas como la lucha por la equidad y la defensa de la vida a todo nivel, con lo cual se sustentaba la gestión, incluso, en temas como seguridad social, salud o medioambiental.

Federico Gutiérrez recibió el reto de gestionar el posacuerdo en la ciudad ante los avances de las conversaciones con la guerrilla de las Farc en La Habana y la posibilidad de que estas terminaran en la suscripción de un acuerdo, como al final ocurrió. Así, la ciudad asumiría la carga social que implicaba ofrecer oportunidades a una parte importante de la población reincorporada, integrándola a los circuitos productivos de seguridad social, empleo, deporte y recreación, y en medio de la creciente migración venezolana.

Los consensos que rodearon la gestión de Aníbal Gaviria en la Alcaldía generaron unos altos niveles de confianza y una

buena interlocución entre los gremios y los diferentes sectores políticos, pese a los cuestionamientos sobre la gestión en temas como seguridad. El informe de la veeduría Medellín Cómo Vamos sobre condiciones objetivas de calidad de vida en la ciudad entre los años 2012 – 2015 (Medellín cómo vamos, 2016) destacó que la mayoría de la información fue de acceso público a través de la Subdirección de Información del Departamento Administrativo de Planeación, lo cual constituye un indicio del clima de confianza que reinaba en la ciudad.

Es importante destacar el impacto que tuvieron las inversiones asociadas al Fondo Medellín Ciudad para la Vida, constituido por los recursos provenientes de la venta de acciones de la empresa de telecomunicaciones UNE. Estos dineros permitieron sacar adelante varias de las iniciativas del gobierno de Medellín un hogar para la vida, entre ellas los desarrollos urbanísticos de Parques del Río y el programa Familia Medellín, entre otros. El documento destaca que, incluso sin esos recursos, Medellín es la ciudad en Colombia con mayor inversión pública per cápita, sitial que se mantiene desde el año 2008. No obstante, hay una disminución de acuerdo con las cifras de los años anteriores, lo que hizo que ciudades como Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga se acercaran en cuanto a capacidad financiera para realizar inversión social. En esto incidieron las transferencias de EPM, producto del avance de proyectos clave como la hidroeléctrica en Ituango.

El informe destaca avances en la distribución del ingreso, la reducción de las brechas en cuanto a condiciones de vida en los territorios, de manera particular en lo urbano respecto de lo rural; en relación con ello, la reducción de los índices de pobreza y de pobreza extrema mantuvieron un ritmo de avance, aunque con cierta desaceleración. Asociado a este contexto, en el panorama del empleo local se destaca el sector público como uno de los principales empleadores en la ciudad. La dinámica empresarial y la competitividad del sector productivo de la

ciudad mostraron logros importantes al posicionarse en lugares de privilegio en escalafones nacionales e internacionales; este segundo ámbito fue clave en la estrategia de internacionalización de la ciudad, lo que contribuyó a que aumentara el número de empresas, es decir, la densidad empresarial de la ciudad asociada a los estímulos para la innovación, que incluyó la alianza entre los sectores público y privado mediante el ya conocido mecanismo de APP (alianzas público-privadas).

A pesar de algunas observaciones y polémicas en torno al manejo de los indicadores de seguridad, en particular el de la violencia homicida, uno de los principales logros del gobierno saliente fue la reducción histórica en materia de homicidios, con cifras que, según el informe de Medellín Como Vamos, fueron las más bajas de los últimos 18 años, lo que hizo que Medellín sobresaliera como una de las principales ciudades con mejor percepción de seguridad, a pesar del clima de incertidumbre que deparaba el desenlace de las negociaciones de paz en La Habana, un factor que incidió de forma clara en las decisiones que se tomaron en las urnas y que apuntaló en gran medida el triunfo de Federico Gutiérrez como garante de ese clima de seguridad que se destacaba entre la ciudadanía.

El panorama no era tan claro en la gestión del medioambiente, pues en Medellín persistían las dudas y las inquietudes sobre el proceso de urbanización acelerado en sus laderas, las construcciones irregulares, relacionadas con el aumento de los desastres invernales, asociados a crecientes y deslizamientos, pues la ocupación de las laderas guarda relación con el deterioro de las cuencas hidrográficas de estas, lo cual incide en inundaciones y movimientos de tierra, que sobre la mesa se centraban en fenómenos delictivos de la ya mencionada construcción irregular y la deforestación y loteo de dichos territorios. Todos estos asuntos movilizaron una gran masa crítica y organizada que abrió debates y discusiones sobre la calidad del aire en la ciudad. Medellín se vería abocada a de-

cretar sus primeras emergencias ambientales en los meses siguientes, como consecuencia del deterioro de la calidad del aire, cuyo monitoreo y medición se empezó a fortalecer gracias a alianzas entre el gobierno local, la academia y los gobiernos de la subregión en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Desde estas causas se consolidaron movimientos ciudadanos que, primero en torno a la gestión ambiental, luego a la gestión de seguridad y luego a lo cultural, impulsaron iniciativas cívicas como las que pretendían promover la ocupación del centro de la ciudad. También organizaciones como las cajas de compensación, los centros culturales y la academia jugaron un papel determinante a la hora de construir masa crítica para identificar y preservar los que se consideraban logros notables de Medellín en el último tiempo. Esto abriría la puerta a debates futuros sobre las medidas del Gobierno local en la conservación de condiciones ambientales saludables, discusiones sobre el desarrollo industrial de la ciudad y la seguridad. Estos asuntos definieron también la agenda de *Voces ciudadanas* durante este año, que se dedicó al desarrollo constructivo sostenible y a las garantías de no repetición de las violencias.

2015-1

Por la construcción sostenible

Voces ciudadanas fue uno de los soportes para la construcción de una línea de base para formular una política pública para la construcción sostenible. Uno de los documentos del Área Metropolitana (2015) que recoge detalles al respecto explica que:

El proceso de formulación de la Política se desarrolló entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 en asocio con la Universidad Pontificia Bolivariana y contó con la valiosa

colaboración de diversas instituciones que han participado activamente, mediante el suministro directo de información, la atención de entrevistas y la asistencia a mesas y foros de discusión, tales como: las Secretarías de Planeación Municipal de los municipios adscritos; las Curadurías Urbanas; la Cámara Colombiana de la Construcción Seccional Antioquia (CAMA-COL, Antioquia); el Centro Nacional de Producción más Limpia (CNPML); la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU); la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA); el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED); las Empresas Públicas de Medellín (EPM); la Corporación Financiera Internacional (IFC), la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio e Instituciones Educativas de Educación Superior como la Universidad San Buenaventura, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad de Antioquia y Universidad Nacional Sede Medellín. (p. 3)

Es importante destacar la forma en que la metodología de *Voces ciudadanas* se convierte en un elemento que facilita la articulación entre una gran cantidad de actores en favor de objetivos comunes. Dichas entrevistas, mesas y foros de discusión fundamentaron uno de los aportes de la academia mediante ejercicios investigativos, que se suman a otros insumos de la línea de base para la formulación de la Política Pública de Construcción Sostenible: informes globales sobre medioambiente, desarrollo humano, hábitat y desarrollo económico, generados por organismos multilaterales; documentos técnicos para la formulación de políticas nacionales; documentos técnicos para la formulación de instrumentos de planeación metropolitana y municipal; reportes estadísticos elaborados por entes gubernamentales y por el gremio de la construcción.

El trabajo desde el Grupo de Investigación en Comunicación Urbana (GICU) con este proyecto estuvo articulado especialmente al componente de comunicaciones. En este se adelantó un mapeo de actores estratégicos para identificar todos los posibles participantes en cada fase de la construcción. Mediante una matriz Poder-Interés se hizo un ejercicio de priorización. La caracterización de los citados actores se realizó identificando sus intereses respecto a la política a partir del mismo instrumento. Con esta información, se establecieron mesas de trabajo durante los primeros cuatro meses de la formulación.

Al concluir el levantamiento de la línea base, la revisión del marco jurídico y la identificación y selección de instrumentos de política pública, se organizaron tres foros de discusión donde se presentaron los avances de la formulación de la Política Pública y se recogieron observaciones e inquietudes por parte de los representantes de los diferentes grupos de interés. Estos resultados se consideraron para un foro de cierre donde se publicó el consolidado de la participación de los grupos de interés en la formulación.

La vinculación de la ciudadanía en la consulta se efectuó mediante las redes sociales y medios de comunicación acerca de la percepción, experiencias y propuestas de la ciudadanía en torno al tema. En complemento, se hizo una rueda de prensa sobre los avances del proyecto.

La metodología de *Voces ciudadanas* resultó relevante para una estrategia de comunicación integral, acorde a una Política Pública sustentada en corresponsabilidad y concertación. De ella se derivaron guías para la construcción sostenible que constituyen el derrotero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en sus labores de autoridad ambiental en los diez municipios de su área de influencia.

2015-2

Voces ciudadanas. La violencia no se repite

La Alcaldía de Medellín, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y USAID, contrató a la Corporación Región para construir un diagnóstico de las causas de las violencias en Medellín, sus principales daños colectivos y las medidas necesarias para prevenir la repetición de esas violencias. El GICU suscribió en 2015 un contrato con la Corporación Región, la Alcaldía de Medellín y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de la Estrategia de Garantías de No Repetición y Cultura de Paz; de esa manera, *Voces ciudadanas* entró en esa segunda fase de las actividades, para promover la sensibilización y conocimiento de la Estrategia de Garantías de No Repetición y Cultura de Paz entre la ciudadanía, en torno a los derechos humanos y de las víctimas en el contexto del conflicto armado en el país y sus repercusiones en la ciudad, a través de una cultura de paz que facilite la resolución pacífica de los conflictos.

Un ejercicio de periodismo público era, para los convocantes, una buena manera de adelantar un ejercicio participativo y de comunicación pública en torno a la importancia de las Garantías de No Repetición, como parte de la transformación de las causas de las violencias en Medellín y de cambios socio-culturales en favor de la construcción local de la paz.

El trabajo de *Voces ciudadanas* permitió validar la información obtenida durante la primera fase sobre las percepciones de la población de Medellín en torno a lo que debe hacerse para evitar la repetición de los fenómenos de violencia que marcaron la historia del desarrollo de la ciudad. La metodología facilitó un enfoque propositivo para priorizar medidas y planear la implementación de la Estrategia de Garantías de No Repetición y Cultura de Paz.

En este proyecto se implementó la metodología ePARTEDI como herramienta para mejorar la comunicación con los habitantes y organizaciones de la ciudad mediante el uso de las TIC y la cualificación de la participación ciudadana a través de estas tecnologías. Este desarrollo metodológico de difusión, amplificación y análisis fue implementado con el Grupo de Investigación en Desarrollo de Aplicaciones, Telecomunicaciones e Informática (GIDATI). Se sirve de herramientas de análisis de datos cualitativos de la participación, estrategias de monitoreo en las redes sociales y medios de comunicación colaboradores.

Las entidades participantes en el proyecto reconocieron en las participaciones de la ciudadanía una expresión de democracia directa, que valora los sentimientos, percepciones, emociones y propuestas de las personas consultadas en su calidad de constituyentes primarios.

Llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales, conversaciones ciudadanas, entrevistas, informes periodísticos y otras actividades que involucraron medios tradicionales como Hora 13 Noticias, comunitarios y alternativos como los periódicos La Pupila, Mi Comuna 2, entre otros, permitieron abordar en el lapso de un mes y medio tres preguntas alrededor de la idea de la no repetición de las violencias, derivadas del análisis de los resultados de la primera fase del proyecto y que buscaban priorizar medidas gubernamentales en la materia, identificar compromisos que la ciudadanía estaba dispuesta a asumir con ello, así como formas de violencia que los ciudadanos hayan justificado o ejercido.

Además, se dispuso de una Cápsula digital para recoger más respuestas de quienes asistieron a los foros. Dos diálogos ciudadanos, uno sobre justicia restaurativa y garantías de no repetición, fueron convocados mediante invitación abierta por redes sociales, correos electrónicos y medios aliados. En particular, el segundo de ellos propuso responder a la pregunta

¿qué le propondría al alcalde para contribuir a la no repetición de las violencias en Medellín?

Las propuestas de la ciudadanía apuntaron al cierre de las brechas sociales y al mejoramiento de la convivencia, desde los ámbitos más cotidianos a los escenarios macro. Dar prioridad a la violencia intrafamiliar, la formación ciudadana en valores y con carácter cívico, en sintonía con programas integrales de carácter cultural, concordantes con las necesidades de una ciudad caracterizada por la densificación de los espacios, los fenómenos migratorios y el deterioro del entorno a causa de la acción humana. Los ciudadanos consideraron importante, además, la reivindicación de la memoria histórica como base de la construcción de bienes colectivos en esos contextos, mediante las prácticas ciudadanas, enmarcadas en educación para la paz y el civismo.

2018

Contexto³

En 2018, la ciudad conocía las prioridades del Gobierno de Federico Gutiérrez, orientado a la seguridad y a la continuación de los principales proyectos de infraestructura pública legados por Aníbal Gaviria, todos muy vinculados a la gestión de la movilidad en la ciudad y a la búsqueda de soluciones alternativas para el transporte de los medellinenses. En 2018 ya era un problema crítico el debate por la calidad del aire, pues para un amplio sector de la población había un ocultamiento de información sobre la verdadera situación o una inacción por

3 Con cifras de *Informe de calidad de vida de Medellín 2018* (Medellín Cómo Vamos, 2019).

la persistencia de los altos índices de contaminación. Lo cierto es que la medición fue determinante para la gestión frente al asunto, y en ella tomaron parte no solo el Gobierno local sino también la academia y los gremios.

A pesar de lo anterior, la medida de pico y placa aplicada al transporte público y al transporte individual de motocicletas fue la más visible para hacer frente a la situación. Sin embargo, la pregunta por los efectos sobre la salud y la vida de las personas fue una constante con las sucesivas declaratorias de emergencias ambientales en el primer y tercer trimestre del año.

Se acentuaron las dudas, discusiones y reservas del mandatario local frente al acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc en La Habana, con lo cual, a juicio de muchos, se aplazaron decisiones y posiciones para hacer frente a la gestión social que implicaba la atención de la población desmovilizada, sobre todo en lo relacionado con los aportes de la Alcaldía de Medellín a la atención dentro de las zonas veredales y de los territorios en los que hay proyectos de interés del Gobierno local con el resto del departamento de Antioquia.

Entretanto, los esfuerzos del Gobierno local se dedicaron a las estructuras delincuenciales capturando cabecillas y mandos medios, y atacando las finanzas de estos grupos ilegales para hacer frente a las industrias del microtráfico, la extorsión y otras actividades ilegales. Fueron numerosos los golpes contra la delincuencia que llamaron la atención de la opinión pública en la ciudad y en el país, y que posicionaron al de Federico Gutiérrez como un gobierno que priorizaba la lucha contra el crimen.

Por otro lado, la encuesta de calidad de vida de la veeduría Medellín cómo vamos señalaba que el de Medellín era uno de los ingresos per cápita más altos del país en el año 2018, luego de Bogotá con un mayor índice de clase media y una menor proporción de clases pobre y vulnerable que la capital del país.

En medio de este contexto, la gestión tributaria y los giros e ingresos del Gobierno municipal por cuenta de las transferencias de EPM, entre otras, permitieron elevar el gasto público a niveles cercanos a la época récord de 2014. Según las cifras oficiales, esta inversión se priorizó en los sectores de educación y salud; mientras que los relacionados con justicia y seguridad ocuparon una proporción menor, incluso después del sector de movilidad. Era clara la postura respecto al tema de educación como un mecanismo para garantizar condiciones que evitaran el reclutamiento o la llegada de menores de edad a los grupos ilegales. En esa medida, la Alcaldía de Medellín lideró y priorizó numerosos proyectos de infraestructura como la Ciudadela Educativa de Occidente y todos los demás proyectos de acceso y cobertura en educación media y educación superior a través de Sapiencia.

En relación con la inversión pública, es importante señalar que 2018 fue el año en el que se presentó la emergencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango, el más grande construido en el país. Los avatares de este proyecto no solo ocuparon la atención de la opinión pública de la ciudad, sino que tuvieron y tendrían luego influencia en las finanzas públicas, en particular sobre los niveles de inversión por concepto de las transferencias de EPM al Municipio de Medellín, en un contexto en el que, por la migración a la ciudad, por los efectos de la desmovilización de combatientes y el cambio de poderes en los territorios antes ocupados por la guerrilla de las Farc, se produjeron migraciones que fueron asociadas al aumento de los niveles de pobreza en Medellín, para lo cual era muy importante contar con un buen presupuesto para la gestión social.

En relación con esto, es importante también destacar que entre los años 2017 y 2018 Medellín mantuvo una curva ascendente en los niveles de cobertura educativa (81 %) y los niños atendidos de cero a cinco años, sobre todo en el programa Buen Comienzo, llegaban a 82 650. Pero en la educación media

y superior, entre 2016 y 2018, se presentó una disminución de los índices de cobertura que para este último año fue del 74,4 %. Este hecho tiene relación con un reto que para el momento persistía y es que en 2018 apenas un 45 % de los bachilleres lograban llegar a la educación superior. Del mismo modo, respecto de las metas en Pruebas Saber (evaluaciones que miden la calidad de la educación secundaria y media vocacional) el balance seguirá con resultados desfavorables, con niveles insuficientes y mínimos en el 57 % de los casos, mientras que los niveles satisfactorio y avanzado eran solo del 42 %. Esto habla de avances en la cobertura, pero con problemas persistentes en la calidad de la educación.

En relación con lo anterior, los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban se mantuvieron en una cifra cercana al 20 %, lo que habla de esos avances en cobertura educativa. Sin embargo, la persistencia del fenómeno de informalidad laboral, que rondaba el 58,1 %, mayor que en el año 2016, habla también de la calidad de las opciones que tienen las personas que buscan acceder a un empleo; algo determinante también en factores como la seguridad ciudadana, con una tasa de homicidios cercana a los 632 casos en el año 2018.

Un dato dicente de las dificultades a nivel socioeconómico en la ciudad tiene que ver con las cifras de violencia intrafamiliar, con una tasa de 198 por casos por cada 1000 habitantes en el año 2018. Con alrededor de 5000 víctimas, es una tendencia que se mantiene desde el año 2016 con un leve descenso desde el año 2015. Es necesario señalar que este es uno de los factores a los cuales las voces ciudadanas atribuyen varios de los problemas abordados por los proyectos, desde la violencia, la convivencia y la seguridad, hasta los problemas de educación y acceso al empleo.

Estos fenómenos, que no necesariamente están asociados a una dinámica delictiva, tienen impacto en delitos como el hurto en vía pública, que en algunos casos se les denomina

delitos menores. La cifra de 2018 fue de 21 079 denuncias por hurto en la vía pública, lo que impacta en gran medida a la sensación de inseguridad entre los habitantes, a pesar de las capturas que se hacían de grandes cabecillas de organizaciones delincuenciales y su impacto en los organigramas de las estructuras criminales, el ciudadano de a pie seguía sintiéndose inseguro en la ciudad.

2018

Voces ciudadanas por el empleo en Urabá

Para un convenio entre la Unión Europea y la Gobernación de Antioquia, que buscaba desde 2016 la generación de capacidades para acceder al empleo y al emprendimiento, como forma de reducir la pobreza, la exclusión social y los riesgos de la economía informal en Urabá, la Universidad Pontificia Bolivariana sumó esfuerzos, con acciones que incluían un ejercicio de periodismo público mediante la metodología de *Voces ciudadanas*.

La consulta validó percepciones sobre el asunto del convenio e identificó algunas prioridades y propuestas de los habitantes de los 11 municipios del Urabá antioqueño en los temas del empleo y del emprendimiento. Personas, con edades y niveles de formación diversos, expresaron sus opiniones y propuestas para mejorar las condiciones de empleabilidad y emprendimiento.

En la consulta fueron cruciales los medios de comunicación de la zona –muchos de ellos agremiados en la Asociación de Redes Comunitarias de Antioquia (ASOREDES)–. Con los resultados como referencia, el proyecto hizo alianzas con universidades e instituciones públicas, en una experiencia que evidenció el potencial de la región para construir y fortalecer

una opinión pública deliberante, con ciudadanos informados y con criterio.

Es importante destacar la confluencia de nuevas formas del debate público mediante las redes sociales y la mensajería instantánea, en la consolidación de la metodología ePARTEDI, lo que constituye, como todo, un ingrediente interesante para discutir y debatir, de cara a los nuevos horizontes de *Voces ciudadanas*, que sigue siendo vista como una estrategia que motiva a que las personas se apropien de unos temas de interés común, los discutan y generen propuestas que luego son entregadas a los tomadores de decisiones.

En un foro tipo taller de cuatro horas, los asistentes proyectaron mediante mapas parlantes el panorama general que, en su concepto, presenta la subregión en cuanto al empleo y al emprendimiento, con sus oportunidades, dificultades, fortalezas y amenazas. Tres preguntas se divulgaron por medios comunitarios de la subregión, las redes sociales Facebook y Twitter, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y el voz a voz, durante cuatro semanas. Con asesoría experta, se sistematizaron las respuestas por medio del programa NVivo, con el fin de analizar la información y descubrir las conexiones entre los datos.

El equipo investigador articuló los ejes temáticos claves del Convenio Unión Europea-Gobernación de Antioquia: formación, empleo, emprendimiento e inclusión. Las respuestas y un ejercicio de reflexión y discusión teórica fueron la base para el diagnóstico, el análisis de las propuestas y conclusiones.

En términos generales, los ciudadanos destacaron los beneficios del convenio y sus impactos positivos en la construcción de planes para el empleo en la subregión. Destacaron que el trabajo tuviera abordajes pedagógicos consecuentes con la diversidad sociocultural de los participantes: personas de diferentes etnias y grupos etarios.

La inclusión percibida en la experiencia contrastó con la percepción sobre la oferta de empleo en la región, de la cual los participantes se sienten excluidos, pues consideraban difícil mejorar su situación laboral y salir de la informalidad. En su opinión, la oferta educativa debe ser pertinente, al punto que se enmarque en una estrategia que tenga lazos efectivos con el mercado laboral, se acompañe de inversiones en proyectos de infraestructura y obras públicas que afiancen la dinámica de formación y empleabilidad, a lo cual se asocian la promoción de proyectos de capital semilla para el emprendimiento y la construcción de ofertas diferenciadas para la ruralidad.

La participación ciudadana pudo apuntar a conclusiones y propuestas caladas, pues los intervinientes plantearon la necesidad de que el capital humano para Urabá trascienda lo técnico y llegue a la formación de capacidades teóricas y conceptuales, para estimular el desarrollo de emprendimientos a largo plazo y a gran escala.

Este nivel de debate se sintoniza también con logros del equipo investigador habitual de *Voces ciudadanas*, cuya producción académica constituyó aportes a la fundamentación de los proyectos.

2019-2020

Contexto

2019 fue el año en el que Medellín asistió a la consolidación de los resultados y las propuestas de gobierno de Federico Gutiérrez, en medio de un clima electoral asociado a los debates, polémicas y cuestionamientos por la transparencia en el manejo de la gestión de gobierno de cara a una futura votación en la que participaba como candidato uno de los antiguos funcionarios del gabinete municipal, razón por la cual se habló de

influencias y sesgos en la contratación y de condicionamientos que pusieron en entredicho la transparencia de los logros de la alcaldía de Gutiérrez.

La seguridad y los problemas del proyecto hidroeléctrico Ituango siguieron en un lugar de privilegio en la agenda pública. Entre tanto, en Medellín se mantenían las condiciones estructurales de desigualdad, con barreras a la reducción de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad, a pesar de un crecimiento sostenido de la economía, en medio, también, de la incertidumbre sobre las finanzas de EPM, a raíz de lo que sucedía en el proyecto hidroeléctrico.

No obstante, los esfuerzos para atender un número creciente de pobladores en la ciudad de Medellín, se perdió el liderazgo en inversión pública por habitante, pues sería necesario racionalizar los mismos recursos con una población que aumenta a un ritmo cada vez mayor. Se consideran los fenómenos migratorios desde el extranjero y desde otras regiones como el Bajo Cauca, el sur de Córdoba, el Urabá y el Chocó, lo cual también plantea otros retos estructurales como el de mantener o mejorar la capacidad de recaudo tributario para desarrollar soluciones de sostenibilidad financiera del Gobierno local por lo menos hasta el año 2030.

En relación con lo anterior, persistían oportunidades de mejoramiento para la transparencia de la gobernanza, en especial en lo relativo a la gestión financiera del gobierno. Mientras seguían en debate las opacidades en lo referente a la calidad del aire, con la idea de que Medellín fuera pionera en el desarrollo de un modelo de gestión y de atención que permitiera tomar decisiones para proteger la salud de los habitantes y solucionar de manera estructural, y no solo contingente, los episodios de emergencia atmosférica.

Con el antecedente de la elección de Federico Gutiérrez por un movimiento ciudadano no vinculado de forma directa con los partidos tradicionales, en la elección del próximo alcalde

pesaron muchísimo las coaliciones y las alianzas para rodear candidatos que se posicionaban como independientes. Así, los electores se debatieron entre las propuestas de continuidad y que garantizaban un modelo que había sido considerado exitoso a nivel nacional desde el partido Centro Democrático, frente a varios candidatos que se proclamaban como independientes. Entonces se vieron muchas propuestas así denominadas, entre las que se necesitaba elegir sin que mediara como requisito la claridad sobre un programa o una propuesta de gobierno o un criterio de acción para la gestión de lo público.

Fue en esas circunstancias y bajo esas etiquetas que resultó elegido Daniel Quintero Calle, quien, al momento de desarrollarse los proyectos de *Voces ciudadanas* que se relacionan a continuación, generaba muchas expectativas por lo que había sido su gestión como funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos en temas de innovación y emprendimiento y como líder de opinión (de oposición, en síntesis) al proyecto hidroeléctrico Ituango.

2019-2020

Voces ciudadanas por un aire saludable

Se expresaron aprendizajes de experiencias previas en desarrollos notables incorporados a este proyecto: la articulación de muchos estamentos académicos que dieron soporte a las discusiones de la consulta: además del GICU, unieron esfuerzos el Grupo de Investigación Biología de Sistemas y el Grupo de Investigación en Salud Pública. Fueron aliados institucionales: Minciencias, la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Salud, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Escuela de Ecología Urbana del Valle de Aburrá.

Otro ingrediente notable fue el uso de plataformas digitales para todo el registro, la documentación y parte importante de la comunicación del proyecto y sus avances, idea que puede servir como piloto para construir una plataforma con todos los documentos y datos de *Voces ciudadanas*.

Esta perspectiva sobre la información asociada al proyecto permitió que el desarrollo de la cartilla, editada con los detalles y resultados de este, se hiciera en esta ocasión de forma apta para divulgarse en el repositorio institucional de la UPB, cumpliendo los parámetros de producción científica, definidos por los estándares nacionales (Marín et al, 2020).

La prioridad siguió en la promoción de la participación, pero los objetivos del proyecto apuntaron de manera directa a la discusión como fuente de conocimiento que dialoga con el trabajo de los actores académicos involucrados para que sus acciones incidan de manera concordante con el contexto, en diálogo con el ya contemplado aporte a la formulación de políticas públicas, pero ahora "con información diversa, pluralista y de calidad científica y social", según dice la referida cartilla, que se destaca por presentar formas más sintéticas, claras y atractivas de presentar la información, mediante el uso de infografías y otros recursos similares. Por ejemplo, con una línea de tiempo expone el planteamiento metodológico del proyecto.

Voces ciudadanas por un aire saludable inició con un foro tipo taller en el que se presentó a la ciudadanía participante el tema a trabajar y la metodología del proyecto. De allí salieron cuatro preguntas: ¿Cómo pueden afectar sus actividades cotidianas la calidad del aire del Valle de Aburrá? ¿Cuáles son los efectos y responsables de un aire contaminado del Valle de Aburrá? ¿Qué propuestas tiene además de las ya implementadas por los tomadores de decisiones del Valle de Aburrá, para mejorar la calidad del aire que respira? ¿Cómo haría el seguimiento y control a las acciones individuales y colectivas para mejorar la calidad del aire del Valle de Aburrá? Estas

cuestiones motivarían las respuestas y el mayor volumen de datos para analizar. Luego, con el apoyo de las redes sociales y los medios de comunicación aliados, se difundieron las preguntas; se recogieron los comentarios, opiniones, propuestas y reacciones, y se interactuó con respuestas y aclaraciones metodológicas cuando fue necesario. Las preguntas apuntaban a las percepciones sobre la acción individual y otros factores incidentes en la calidad del aire en la subregión, así como buscaban propuestas de mejora en el asunto y para el seguimiento y control de estas.

Tres conversatorios temáticos sobre la calidad del aire y su relación con la salud buscaron darles herramientas a las personas interesadas en participar en las etapas posteriores: tres grupos focales, uno con la ciudadanía, otro con la academia y el tercero con las instituciones y empresas, para discutir las causas del aire contaminado, las afectaciones, propuestas de solución y mecanismos de seguimiento.

Los análisis y resultados se expusieron ante un grupo representativo de ciudadanos participantes en los diferentes momentos de la investigación, para validar y legitimar tanto los hallazgos como la codificación que realizaron los investigadores del proyecto. Se les explicó la creación de las categorías: Actividades cotidianas, Afectaciones de salud, Industria, Territorio, Medidas de prevención, Propuestas, Efectos, Responsables, Alternativas de movilidad, Educación, Espacios sostenibles, Formalizar teletrabajo, Flexibilidad laboral y académica, Tomadores de decisiones, Comunicación y Educación, Denuncia ciudadana, Entes de control, Participación y Tecnología. Estas agruparon líneas de interpretación posible a través de un análisis descriptivo. Así, se identificaron los términos más recurrentes y las claves resultantes en cada una de las preguntas formuladas y en los grupos focales. Esto da cuenta del buen nivel de la discusión logrado por todo el trabajo precedente.

Los ciudadanos ven necesario auditar la gestión de las autoridades en el control de la calidad del aire, junto con mecanismos ágiles de denuncia, reporte y rendición de cuentas, en especial en torno a las solicitudes ejercidas por las ciudadanías. Las propuestas apuntan a la movilidad con bajas emisiones de carbono, mediante la desincentivación del carro particular, la mejora de la calidad de combustibles; la revisión de los modelos de urbanización, producción, consumo y gestión energética, con componentes significativos de participación en la planeación, a partir del intercambio de buenas prácticas y una mayor inversión en educación y cultura ambiental, de lo cual los ciudadanos consideran parte una mayor apertura en la comunicación, en especial desde los actores de gobierno, con los medios como puente cercano y promotores de un relato que ahonde en las causas y consecuencias del deterioro ambiental, así como en el valor de la investigación y la innovación en la búsqueda colectiva de soluciones.

En este proyecto, los colectivos ciudadanos organizados en torno a causas como la sostenibilidad, el uso de la bicicleta y la calidad del aire fueron grandes protagonistas, lo cual constituye un indicio de la forma en que progresa la organización de la sociedad civil en Medellín.

En los resultados es notorio el aporte y sustento del proyecto, no como una consulta aislada, sino como parte de un ejercicio más amplio y muy sólido de investigación y desarrollo desde los estamentos académicos participantes, lo cual puede corroborarse en la profusa bibliografía de la cartilla.

Voces ciudadanas se integró como parte importante de todo el componente comunicacional del proyecto: no solo la convocatoria y divulgación de las actividades de consulta, sino toda la gestión de medios de comunicación, en equipo con las oficinas de comunicaciones de las entidades involucradas. Esto significó un progreso notable derivado de esta experiencia, junto con otros muy relevantes: el ya mencionado uso de las

plataformas digitales para la documentación; la información y comunicación del proyecto se hizo mediante un abanico diverso de formatos en los contenidos, lo que también permitió la vinculación de estudiantes y semilleros, con muy buenos aportes de innovación y comunicación desde una perspectiva creativa para la movilización.

En línea con lo anterior, este proyecto amplió y diversificó la base de autores de referencia, al considerar consultas similares en el continente, además en diálogo con la producción del propio equipo investigador, que incluso señalan derrotero para las perspectivas futuras de *Voces ciudadanas*.

En este proyecto, los participantes ponderaron el impacto de *Voces ciudadanas* más allá de escuchar de forma directa a las personas y lo perciben como un reflejo de la mezcla de relaciones diversas entre las instituciones y de ellas con la ciudadanía, en referencia permanente a las bases de una democracia participativa fundamentada en la libertad de prensa y de expresión.

Referencias

- Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2015). *Política Pública de Construcción Sostenible*. https://www.metropol.gov.co/ambiental/Documents/Construccion_sostenible/PPCSILineaBase27112015.pdf
- Bedoya Jiménez, J. G. (2019). Ecos de las Voces Ciudadanas en medio de gritos, susurros, coros y silencios en Medellín a finales del siglo XX. Huellas de periodismo público en la experiencia de Voces Ciudadanas. *Comunicación*, 41. <http://dx.doi.org/10.18566/comunica.n41.a03>
- Gidati - GICU (2014). *Guía metodológica para la participación en territorios digitales (ePARTEDI): Experiencia en la formulación del Plan de Ordenamiento territorial de Medellín*. (Manual operativo inédito). Universidad Pontificia Bolivariana.

- Kauchakje, S. Penna, M. Frey, K. Duarte, F. (2006). Redes socio-técnicas y participación ciudadana: propuestas conceptuales y analíticas para el uso de las TICs. *REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales*, 11(3). <https://doi.org/10.5565/rev/redes.88>
- Marín Ochoa, B. E. (2015). De Voces ciudadanas a ePARTEDI. Comunicación, Educación, Discursos y Estrategias al servicio de la participación ciudadana. *Actas de Periodismo y Comunicación*, 1(1). <https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/actas/article/view/2902>
- Marín Ochoa, B., Marín Pineda, D., Ortiz Trujillo, I., Bedoya Jiménez, J., Orozco Jiménez, L., Sánchez García, Ó., Botero Arango, L., Ceballos Sepúlveda, J., Giraldo Pérez, Y., Londoño Berrío, M. y Pérez Orduz, M. (2020). *Voces Ciudadanas por un aire saludable*. <https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/6191>
- Medellín Cómo Vamos (2015). *Informe de calidad de vida de Medellín 2014*. <https://www.medellincomovamos.org/sites/default/files/2020-01/documentos/Conclusiones-%20Informe%20de%20indicadores%20objetivos%20sobre%20la%20calidad%20de%20Vida%20en%20Medell%C3%ADn%2C%202014..pdf>
- Medellín Cómo Vamos (2016). *Informe de calidad de vida de Medellín 2012-2015*. <https://www.medellincomovamos.org/sites/default/files/2020-01/documentos/INFORME%20DE%20CALIDAD%20DE%20VIDA%202012-2015-INFORMES-CALIDAD%20DE%20VIDA-MEDELLINCOMOVAMOS-JULIO%202016.pdf>
- Medellín Cómo Vamos (2019). *Informe de calidad de vida de Medellín 2018*. <https://www.medellincomovamos.org/system/files/2020-04/docoprivados/Presentacion%20ICV%202018.pdf>
- Ministerio de Educación Nacional (2007). *Plan nacional decenal de educación 2006-2016*. https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/colombia_plan_decenal_educacion_2006-2016.pdf

- Miralles Castellanos, A. M. (1999). *Voces Ciudadanas por la Reconstrucción*. (Documento inédito del proyecto). Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín.
- Miralles Castellanos, A. M. (2000). *Voces ciudadanas. Una idea de periodismo público*. Editorial UPB.
- Servicio Geológico Colombiano. (s. f.). *Sismo de 1999/01/25*. <https://sish.sgc.gov.co/visor/sesionServlet?metodo=irAlInfoDetallada&idSismo=62>
- TPE POT E-PARTICIPACION (2013). *Primer informe Convenio de Asociación proyecto CIDI: TPE POT E-PARTICIPACION para el "Seguimiento, gestión y análisis de la opinión de los ciudadanos sobre el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de la ciudad de Medellín, mediante mecanismos de e-Participación ciudadana"*. (Documento de trabajo inédito). El Centro de Investigación para el Desarrollo y la Innovación (CIDI), Universidad Pontificia Bolivariana.
- TPE POT E-PARTICIPACION (2013). *Segundo informe Convenio de Asociación proyecto CIDI: TPE POT E-PARTICIPACION para el "Seguimiento, gestión y análisis de la opinión de los ciudadanos sobre el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de la ciudad de Medellín, mediante mecanismos de e-Participación ciudadana"*. (Documento de trabajo inédito). El Centro de Investigación para el Desarrollo y la Innovación (CIDI), Universidad Pontificia Bolivariana.
- TPE POT E-PARTICIPACION (2014). *Tercer informe Convenio de Asociación proyecto CIDI: TPE POT E-PARTICIPACION para el "Seguimiento, gestión y análisis de la opinión de los ciudadanos sobre el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- de la ciudad de Medellín, mediante mecanismos de e-Participación ciudadana"*. (Documento de trabajo inédito). El Centro de Investigación para el Desarrollo y la Innovación (CIDI), Universidad Pontificia Bolivariana.

Voces ciudadanas (2014). *Voces ciudadanas por la seguridad y la convivencia en Medellín y el Valle de Aburrá*. Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Voces Ciudadanas (s. f.). *Voces ciudadanas por un aire saludable*.
<https://tb-colombia.org/voces-ciudadnas>.